

El discurso neoliberal boliviano y la crisis de sus científicos sociales

FRANZ XAVIER BARRIOS SUVELZA*

Resumen: Este artículo parte de una revisión de los principales institutos discursivos del neoliberalismo boliviano, en permanente referencia a un periodo gubernamental de grandes reformas estatales (1993-1997). Revisa, de manera exploratoria, ciertas variables explicativas de buena parte del retraso institucional y económico del país y se centra en un análisis de la crisis de capital intelectual al someter a un balance crítico el rol conservador de los científicos sociales bolivianos que se ha hecho hegemónico en el periodo neoliberal que ellos se han preocupado por legitimar.

Abstract: This article begins with a review of the principal discursive institutes of Bolivian neoliberalism, in relation to a governmental period of major state reforms (1993-1997). It reviews certain variables that account for much of the country's institutional and economic backwardness, and focuses on an analysis of the crisis of intellectual capital by critically evaluating the conservative role of Bolivian social scientists that became hegemonic during the neo-liberal period they sought to legitimize.

Palabras clave: neoliberalismo, capital intelectual, ciencias sociales.

Key words: neo-liberalism, intellectual capital, social sciences.

I. OBJETO DEL ENSAYO

EL NEOLIBERALISMO ES UNA VARIANTE DE LA comprensión fundamentalmente económica de la sociedad y es también un ejercicio práctico de política pública global basado en una normatividad.¹ Su normatividad se caracteriza por varios elementos, como el de ser una expansión espectacular de la propiedad privada de los medios de producción en oposición central a la propiedad estatal e incluso, por norma, a aquella “comunitaria”. Propende luego a una desregulación de las relacio-

* Dirigir correspondencia al Instituto de Planificación Urbana y Espacial, Universidad Técnica de Berlín, e-mail: barrjbbi@linux.rz.z.tu-berlin.de.

¹ En el neoliberalismo convergen por supuesto valores “jurídicos” o “culturales” que lo convierten en más que una mera reflexión y práctica economicista. Pero incluso valores centrales no eminentemente económicos son usados por el discurso neoliberal justamente para cohesionar un sentido finalmente económico. Sobre esto y el neoliberalismo como “teoría normativa”, véase de Jürgen Habermas, 1998, “Die Postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie”, documento presentado el 5 de junio de 1998 en el Congreso Philosophie und Politik-Die Einbeziehung des Anderen Kulturforum der Sozialdemokratie, Berlín, p. 31. Aquí en especial obsérvese el tipo de libertad que, según Habermas, el neoliberalismo pone en la base de su doctrina, pero sobre una comprensión “disminuida” del concepto normativo del individuo.

nes de intercambio compensando esto con sistemas de gendarmería sectorial, ubicados en lo que queda del aparato estatal, para resguardar un mínimo respeto de topes en precios, calidad de servicios y “juego limpio” de los actores económicos.² Además, el neoliberalismo se destaca porque al tiempo que pugna por un gasto público no deficitario, reclama que el mismo intensifique su sentido “social” o “humano”. Es por ello el neoliberalismo una normatividad que se autoproclama como “sensible” y “preocupada” por los potenciales procesos de exclusión social. Esto viene unido a otro rasgo: el de que el neoliberalismo acepta, benevolentemente, que el mercado “puede fallar” y por ello no es casual que la época neoliberal esté unida a un reclamo por una mayor “institucionalidad” general que mitigue las admitidas “fallas” del mercado y a la vez deje entrever que no profesa una enemistad absoluta con algún grado de Estado. La cohesión dogmática final proviene del instrumental analítico que le alcanza el pensamiento económico neoclásico en su versión más pura.³

Ahora bien: esta normatividad no ha dejado de corporizarse en los marcos nacionales, y es su aplicación *acrítica y desadaptada* en Bolivia, es decir, una suerte de provincialismo en la operativización de políticas públicas y su respaldo discursivo en una situación que, como la boliviana, carece de aquellas condiciones socioinstitucionales cuyo previo desarrollo podría hacer en un momento dado del neoliberalismo algo más plausible, lo que califico como “lo criollo del neoliberalismo boliviano”.

El presente ensayo tratará de caracterizar mejor este rasgo criollo aprovechando para ello el análisis de las grandes reformas estatales vividas en Bolivia entre 1993 y 1997 que debaten los modos de imposición sutil de la normativa neoliberal. La acriticidad y desadaptación del neoliberalismo criollo debe gran parte de su calidad a las deficiencias de quienes —teniendo un papel privilegiado en una explicación que ojalá fuera crítica y técnica de la realidad— debieran ser útiles para alejar a la práctica pública de la ingenuidad y la impertinencia técnica: me refiero a los científicos sociales.⁴ Es por eso por lo que en las líneas que siguen, el hilo conductor será la indagación del discurso neoliberal y cómo éste encontró en la intelectualidad boliviana hegemónica portavoces efectivos de su reproducción doctrinaria. Como los intelectuales de las ciencias sociales son factores que pertenecen al paquete de variables superestructurales que influyen a su modo en el desarrollo de toda sociedad, la tematización del rol de los intelectuales pondrá además sobre la mesa el tema de cómo afinar mejor la imputación o “regresión” de los efectos del atraso nacional a causas más intangibles, pero no por ello menos efectivas, que la mera baja de la inversión física empresarial o de aquella hecha por el Estado en la infraestructura vial.

² Para una visión histórica de la pugna por la regulación estatal y el mercado en la consolidación del capitalismo, remitimos a la obra reveladora de Karl Polanyi, *The Great Transformation*, Beacon Press, Boston, 1965, pp. 149 ss.

³ Una versión extrema de un entendimiento economicista y neoclásico de diversos aspectos de la vida misma se puede ver en la obra de Gary Becker, *The Economic Approach to Human Behavior*, The University of Chicago, Chicago, 1978.

⁴ Cuando en el texto se habla de “intelectualidad” se hace referencia exclusiva a los científicos sociales.

2. LA ÉPOCA SOCIAL DE LA BOLIVIA CONTEMPORÁNEA

Una condición básica para comprender lo que sigue, será tratar de descifrar el contenido del momento histórico que vive Bolivia. Entre 1952 y 1982, Bolivia atravesó un periodo que, dada la constancia de ciertos arreglos sociales estables puede ser analíticamente encapsulable. Uno de los rasgos unificadores de este bloque fue el creciente intervencionismo estatal. Este periodo, que empezara con la gran nacionalización de las minas y la reforma agraria y concluyera con la recuperación democrática, constituyó así una *tesis* social que a su turno fue contundentemente contestada desde 1985, a través de un nuevo periodo relacionado con lo que se conoce como la fase del ajuste estructural. El diseño de políticas públicas que opera desde 1985 significa un desmantelamiento tan claro de las prácticas estatales previamente asentadas, que por su organicidad también permite se le califique como una compacta *antítesis* al periodo previo. Hasta aquí son pocos los disensos. Pero comienzan cuando para unos,⁵ esta *antítesis* es el puerto final de una reconstrucción nacional “modernizadora”, financieramente estable, de un Estado “jibarizado” y una pobreza oficialmente lamentada; y para otro enfoque, la creciente miseria industrial, cierta inercia cultural y una potencial inviabilidad global, exigen, al contrario, una *síntesis* histórica que salde cuentas con los dos anteriores periodos. El retraso de la instauración de este “saldar de cuentas” puede deberse, entre otras cosas, a que la vigente *antítesis* que se iniciara en 1985, fue contundente frente a la *tesis* estatizante que arrancara en 1952. Ha logrado, por ejemplo, refundar con eficacia una concepción del rol del Estado frente a la sociedad, pero en especial, frente a la economía. Y este contraste propositivo antiestatista es tanto más efectivo cuanto más se descubre lo incompetente que fue el intervencionismo estatal previo. Se puede decir que debido a su peculiar relación con el rol del Estado en la economía, pero en grosera adaptación al medio, la actual *antítesis* social que Bolivia vive puede llamarse un modelo *neoliberal* de carácter *criollo*. Por cierto, es a todas luces entendible que ninguna *síntesis* antineoliberal sea posible sin que el neoliberalismo criollo mismo no haya desplegado todos sus atributos, virtudes y defectos, dejando percibir por tanto en ese acto, los aportes y contribuciones que a través de él y para el futuro, es contraproducente no recuperar. Por eso, en “anti-neoliberal”, lo “anti” no

⁵ Éstos están expresados en los trabajos de autores como Carlos Toranzo, Fernando Calderón, René Mayorga, Gustavo Fernández o Jorge Lazarte. Ellos forman el núcleo del grupo hegemónico intelectual de la fase neoliberal boliviana. Algunos textos representativos de este grupo serán considerados conforme avance el análisis. En el caso boliviano es de destacar que este grupo está apenas vinculado a centros universitarios —de hecho irrelevantes en la investigación social— y más bien pertenece a centros privados de investigación (como el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios o la Fundación Milenio, por nombrar algunos). Adicionalmente se ha vuelto normal una relación entre algunos de los centros, el gobierno en turno y agencias internacionales de cooperación, lo cual posibilitó una estabilidad en el financiamiento de un debate más o menos sistemático. El marco de trabajo de los centros ha estado caracterizado por una notable apertura y, si bien gracias a este grupo intelectual se tiene antes que un mejor, sólo un mayor conocimiento de Bolivia, es seguro que sin ellos no hubiese habido el relativo grado de continuidad por ejemplo editorial que ahora Bolivia tiene.

implica dejar de recuperar sabiamente aquello que la fase neoliberal trajo como progresista, sea porque hubo “sanaciones” histórico-sociales atribuibles a la misma o porque incluso sin serle realmente atribuibles, vinieron adheridas a ella por circunstancias específicas. Consecuentemente, un determinado grado de maduración del proceso que nació negando el periodo boliviano encapsulable entre 1952 y 1985, parece ser una de las condiciones para entrever mejor posibles opciones de una síntesis alternativa no-neoliberal de largo plazo.

3. LOS RASGOS DISCURSIVOS DEL NEOLIBERALISMO BOLIVIANO

3.1. El peso de la época no es inmediatamente perceptible

Entre 1993 y 1997 el neoliberalismo criollo boliviano vivió su momento más lúcido. En efecto, después del que fuera un gobierno de pálida administración sin aspiraciones programáticas (1989-1993), Bolivia presenció desde 1993 el inicio de un peculiar experimento de propuesta gubernamental que por primera vez, por ejemplo, salvaba a un programa electoral de acabar como mera oferta proselitista, pues ya en el gobierno, sus propulsores buscaron una inédita conexión entre promesas —de contenidos además sorprendentes— y políticas públicas.⁶ Entre las más destacadas medidas, el nuevo gobierno de entonces decidía, por un lado, emprender la privatización de las más grandes empresas estatales bolivianas empleando una fórmula que se salía de los cánones usuales, y por el otro proponía una inmensa convulsión administrativo-territorial en Bolivia, al impulsar un nuevo sistema nacional de municipios.

Un ambiente de rediseños ministeriales, inclusión de sectores izquierdistas en el gobierno, apertura de carteras ministeriales dedicadas a los temas del género y el indígena, el intento de dar cuerpo a una reforma educativa, una revisión de la ley agraria, una complicada reforma de pensiones y desarrollos en el sistema judicial boliviano, generaron —junto a las dos otras reformas mencionadas— cuatro años de intensos debates, reformas y progreso. Razones sobran pues para que entre los políticos y técnicos bolivianos que apoyaban este experimento boliviano, no faltara quien preguntara, en especial de entre las filas de los izquierdistas de ese entonces en el papel de oficialistas:⁷ “¿dónde está el neoliberalismo que no lo veo?”

⁶ En efecto, para las elecciones de 1993, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido ganador, presentó su programa electoral bajo el nombre de “Plan de todos”. Este programa, hoy se puede decir retrospectivamente, contenía ya los trazos relativamente acabados del inmenso proceso de reformas estatales que hasta 1997 se llevaron a cabo. El “Plan de todos” es producto de un trabajo hecho con anticipación donde jugaron un rol especial técnicos vinculados al candidato presidencial Sánchez de Lozada, algunos autocalificados de independientes y en otros casos provenientes de la empresa privada o incluso de sectores de izquierda. Para una visión ordenada aunque parcial de las reformas y las referencias al “Plan de todos”, véase Horst Grebe (comp.), *Las reformas estructurales en Bolivia*. Fundación Milenio. La Paz, 1998.

⁷ Sánchez de Lozada, por un lado, supo al aliarse con quien acabaría siendo el primer vicepresidente indígena de Bolivia, que así reflejaba en su propuesta política la imagen de una Bolivia real, o sea, multicultural. Por otro lado, se alió con el MBL, para entonces la expresión más influyente de la izquierda

Pero aceptando incluso el valor de las medidas mencionadas —avance más patente aún considerando que hoy por hoy Bolivia probablemente vive desde agosto de 1997 el gobierno más desprovisto de programa de acción pública— la privatización encauzada en aquel periodo gubernamental, con toda la originalidad que se le reconoce, es la prueba más diáfana de lo inmersos que aún estamos en la antítesis neoliberal. Pero ¿cómo es posible afirmar esto si justamente la fórmula de privatización empleada fue de corte *social y productivista*? En efecto, la hipótesis es paradójica pues dos rasgos atractivos de la privatización bajo el gobierno de Sánchez de Lozada fueron: a) comprometer todos los recursos del pago por las empresas estatales, en inversiones en las mismas empresas. O sea, el socio privado quedaba con el 50% del nuevo valor total de la empresa ahora duplicada en capital, pero recibía el derecho pleno de administración mientras el gobierno forzaba una inversión fresca *ipso facto* en cada una de las empresas; b) el otro 50% que momentáneamente quedaba aún en manos del Estado se transfería a todos los bolivianos mayores de edad convirtiéndolos en receptores de dividendos de sus acciones en forma de bonos de apoyo a las pensiones de vejez cuando llegaran a la edad correspondiente; y así de paso, cada empresa acababa, casi paralelamente, en el sector privado. Esta manera de privatización productivista y social, no sin defectos y una que otra incongruencia, se calificó como verdadero acierto propositivo. Pero ni aun así se lograba que Bolivia se desconectara de una época de entendimientos neoliberales, si no es que más bien, ésta se ratificaba.

Esto último por doble vía. Primero porque independientemente de la necesidad y pulcritud de los procesos de enajenación de empresas estatales, las privatizaciones realizadas ya sea bajo el gobierno de Sánchez de Lozada —con la fórmula original anotada— o de su antecesor —en el marco de una gris repetición de esquemas conocidos—, son un rasgo distintivo de cualquier proyecto neoliberal por el efecto reductivo del Estado como principio de hierro. Pero por otro lado, el que estemos inmersos en la plenitud de una fase todavía neoliberal, también se deja probar fácilmente por lo sintomático que es que los operadores de políticas públicas pretendan inducir crecimiento económico justamente a partir de medidas como las de privatización, un dogma también inequívoco de percepción neoliberal. No en vano, para los últimos gobiernos bolivianos (excepto el actual que carece de programa), gran parte si no todas las fuentes de crecimiento de la economía se fundamentaban en la enajenación de patrimonio público empresarial con repuntes imaginados del PIB, atribuibles a ella, del 6% u 8%. Cuán ingenuas eran las hipótesis que ni la privatización capitalizadora del periodo 1993-1997 que acabamos de calificar de *sui generis* —pues implicaba una expan-

boliviana, del que buscó capitalizar la trayectoria anticorrupción, las propuestas campesinas, la relación operativa con proyectos sociales y el atractivo del "intelectual-izquierdista", amén de una fuerte presencia sindical. La ínfima fuerza cuantitativa electoral confirma el uso cualitativo que Sánchez de Lozada procuró en ambos casos. Pero fue sobre ambos aliados donde recayó la titánica tarea de ser anti-neoliberales, ahora ya en la práctica estatal, y verse desde el inicio por ello mismo atrapados en una agria labor de oportunismo discursivo al creer erróneamente que su participación en el manejo administrativo del gobierno caracterizaba la época, cuando era ésta la que les asignaba, sigilosamente, un rol.

sión de inversión fresca, rápida y controlada— se asomó a las promesas oficiales de un crecimiento económico del 8% hasta 1997 y de 7.2% hasta el 2002.

3.2. *Cómo el neoliberalismo impregna incluso estructuras socialmente trascendentes*

El neoliberalismo avanzado y maduro no sólo achica la parte empresarial del Estado, sino que desmantela toda otra forma de intervención estatal al extremo de imposibilitar la existencia de un Estado mínimamente *perspicaz*. A pesar de las voces que califican lo neoliberal como epíteto propalado por izquierdistas frustrados, el espíritu neoliberal acaba impregnando con su tinte muchas medidas gubernamentales que se pudieran dar y en algunos casos tiene incluso procesos que de por sí traspasan o “trascienden” los sentidos neoliberales mismos de la época. La cuestión de la mencionada impregnación indica que hay posibilidades de *querella* sobre las desembocaduras de medidas gubernamentales relativamente neutras lo cual es crucial para una izquierda con aspiraciones de gobierno de coalición. Efectivamente, la fuerza impregnadora del neoliberalismo se visualiza con especial intensidad justamente en las medidas relativamente neutras. Recordemos que una de las lecciones de las crisis de ideologías que vivimos radica en el redescubrimiento de que hay momentos, propuestas o realidades —todos sociales— que no están necesaria y fatalmente “infectados” por un “contenido de clase”. Como se sabe, hubo en la izquierda durante mucho tiempo la práctica de desconocer la posibilidad de que hubiesen realidades sociales que pudieran ser relativamente ínclitas en sus efectos y trasfondos. Se tendía a tratar de hallar siempre el “nervio oculto” tras las ideas o comportamientos sociales. Así también sucedió en las ciencias sociales divididas en “burguesas” y “científicas”. El “carácter de clase” prácticamente se concebía inherente a casi todo lo relativo a acciones sociales. En ese esquema,⁸ el gran desafío era percatarse del “contenido” de clase a tiempo y contraponerle la visión de la otra clase.

Por lógica, los procesos neutros, como tales, al ser fuertemente trascendentes a los apetitos ideológicos de las más diversas épocas, no diferencian lo que sería una izquierda de una derecha, o por lo menos, no lo hacen siempre ni necesaria ni automáticamente. Un caso típico es la constitución de una estructura estable de poder local o municipal en un país. Esta necesidad social es insoslayable para cualquier país que busque una modernidad sostenible. La medida puede venir propuesta en sus rasgos básicos desde partidos conservadores o liberales; o desde partidos de derecha o izquierda. Lo cierto es que tarde o temprano, la inmanejabilidad de un país sin ciertos niveles de eslabonamiento territorial, se hace patente. Sin embargo, tampoco es que lo trascendente esté *absolutamente* libre de lo “clasista”. En otras palabras, si bien en un pri-

⁸ El esquema aludido es el del izquierdismo universal —teórico y práctico— expresable en formas que van desde las versiones crudas del leninismo y la Tercera Internacional, pasan por versiones más heréticas, como el sandinismo estatal en su auge, y acaba en formas más elaboradas, como la separación de aguas de la epistemología althusseriana en su clasificación mazdeísta de las ciencias económicas. Para un panorama general de la evolución doctrinaria del izquierdismo universal en sus orígenes. véase Leszek Kolakowsky, *Die Hauptströmungen des Marxismus*, R. Piper & Co. Verlag, Munich, 1981.

mer momento debe tenerse el cuidado de entender ciertos procesos sociales como poseedores de una neutralidad que metodológicamente nos salva de oponernos políticamente a algo que puede ser de indiscutible beneficio para un país, luego, hecho este acto de mesura analítica, debe considerarse la posibilidad de una *querrela* en el campo de los efectos o desembocaduras de tales procesos, disyuntiva crucial en caso de un cogobierno entre izquierda y otros bandos del escenario político y una de las formas por excelencia para ejercer, desde la izquierda, la diferenciación sin tener que esperar la aplicación plena de todas y cada una de las propuestas propiamente izquierdistas, en el supuesto claro de que hayan dejado el limbo de lo fantasioso.

Para mejor entender, considérese este nuevo ejemplo de Bolivia que ya mencionamos como otra de las grandes medidas entre 1993-1997: la instalación de un nuevo sistema de municipios que con tareas ampliadas y nuevos recursos financieros, cubriría todo el territorio, y en especial, la gran extensión rural hasta entonces desconectada de vínculos administrativo-territoriales; todo en el marco de un proceso de reconocimiento jurídico de las organizaciones de base indígenas y campesinas. Como “Ley de participación popular” (LPP), promulgada en 1994, se conoce a esta voluminosa afectación de las estructuras administrativo-territoriales nacionales. Y nuevamente, aquellos partícipes del gobierno de Sánchez de Lozada que provenían de vertientes izquierdistas no pudieron resistirse a exponer la LPP como el emblema para demostrar(se) que habían sido parte de un gobierno que habría sido todo, menos neoliberal.⁹ Otros más

⁹ La LPP, al ser una de las reformas más impactantes de los últimos 50 años en Bolivia, se hizo rápidamente motivo no sólo de acalorados debates, sino también acreedora de múltiples paternidades. Patente es de entrada el hecho de que los máximos exponentes de la intelectualidad hegemónica no se cuentan entre aquellos que intuyeron este cambio; estuvieron menos involucrados en su diseño o aplicación y más bien fueron sorprendidos por una criatura que normalmente debió tenerlos entre los padres. Sánchez de Lozada parece haber sido el punto donde, de manera decididamente más espontánea que “científicamente” premeditada, se unieron fuentes de inspiración separadas. Estas fuentes encontraron campo fértil en la influencia anglosajona que por razones biográficas tiene en Sánchez de Lozada el *local government*, lo cual se confirma por su insistencia en el control social local de la escuela y su frustrado intento de desconcentrar educación y salud cuando fuera ministro de planeamiento entre 1985 y 1989. En él además jugó un papel central su animadversión ante el nivel intermedio o regional de poder estatal que había sido el foco de debate y legislación sobre “descentralización administrativa” en Bolivia desde 1982 en especial. En este marco —y en combinación con su visible inclinación por atender la temática étnica— aprovecha varias inspiraciones nacionales: las ideas sobre leyes de comunidades indígenas que se vinieron forjando en uno de sus aliados, el MBL. Por otro lado, el municipalismo fundamentalista de personas que luego acabarían ejerciendo cargos ministeriales en el momento de aplicar la reforma. Más allá, el papel de lo local en la práctica de las organizaciones no gubernamentales de acción social probablemente reforzó el tema de la eficiencia del gasto por la vía de la subsidiarización del egreso fiscal y el interés por la participación cercana de la gente en sus asuntos. Pero esto último tiende el puente hacia el otro y muy discutible lado central de la LPP: el estímulo del control social de los sindicatos vecinales y agrarios sobre el poder municipal. Esto último parece reflejar también un deseo político de retomar lo que se considera una experiencia tradicional en Bolivia, desde 1952 en especial, a saber, la injerencia de lo sindical en el manejo del Estado, pero en especial, de la aún fuerte susceptibilidad en ciertos sectores frente a la democracia representativa en Bolivia. El carácter práctico, poco “sociologista” y poco generalista de Sánchez de Lozada explica en parte la indiferencia con la cual trató en este proceso a los científicos hegemónicos que se limitaron a observar el proceso concentrándose más bien a una crítica al estilo “encaprichado” de aquél de manejar los asuntos públicos. Para distintas y más detalladas referencias a la LPP en sus orígenes, véase entre otros: Fernando Molina (comp.), *El pulso de la democracia. Participación ciudadana*

ingenuos se volcaron a la tarea de implantarla creyendo —en el otro extremo— que la medida misma era inmune a cualquier tipo de impregnación “clasista”. En el caso de aquéllos, resulta que no entendieron que la LPP *en tanto* compactación territorial de un Estado en su nivel local, no era suficiente, por su notable valor trascendental, para salvarlos de su probable “claudicación” ante las fuerzas de un gobierno “neoliberal”. Al contrario, el gran dilema era que la querrela de identidad izquierdista se produciría una vez dada la medida y que en el caso de la LPP, se resolvía sobre un aspecto central: cómo impedir que el municipio acabara sin ningún tipo de connotación productivista, de apoyo a una reactivación microeconómica del agro en especial. Era en este punto y no antes ni después que se daba la oportunidad de distinción izquierdista. Lo izquierdista aquí por tanto no era aceptar la LPP así, sin nada más, ni peor aún, desentenderse de semejante reforma por acusarla de no tener “contenidos” de clase. Y es la versión de municipalización finalmente implantada en Bolivia que demuestra la capacidad de impregnación aludida del neoliberalismo la que acabó, precisamente, por adornar la medida trascendente, es decir la LPP en tanto compactación municipal, con un detalle impecablemente neoliberal: en los nuevos municipios bolivianos, por principio filosófico, el Estado no debe intervenir en nada que sea realmente productivo. Este segundo caso nos enseña que si bien no podemos dejar de entender lo trascendental de ciertas macroinstituciones sociales, tampoco podemos dejar de prever que el neoliberalismo intentará una permanente impregnación de cuanto proceso exista para demostrar por esta vía, una vez más, que estamos en medio de una fase histórica con determinado sexo.

Ciertamente el tema de la impregnación¹⁰ se da no sólo respecto de lo que hemos denominado procesos trascendentales, sino de aquellos que sin serlo, igualmente encierran la posibilidad de la querrela en torno a qué desembocadura darle a determinadas medidas de Estado. Para aclarar esta otra posibilidad, volvamos al caso de la privatización capitalizadora recién analizada. Pues difícilmente se calificará cualquier política de privatización de “trascendente” en el sentido recién expuesto cuando, como en Bolivia, era una respuesta históricamente *coyuntural* a la degeneración del empresarialismo estatal. Si bien su crisis galopante hizo del tema de su desmantelamiento un punto de cualquier agenda sensata, no es difícil encontrar en un proceso inverso, bajo otras circunstancias, comparable racionalidad. Por un instante, pues, esta sensatez hacía aparecer la solución privatizadora como un asunto “también” fuera de discusión (como si fuera “trascendente”) cuando en realidad, a diferencia del ejem-

y descentralización en Bolivia. Ministerio de Desarrollo Humano/Nueva Sociedad, Caracas, 1997. Véase también Mario Galindo, “La participación popular y la descentralización administrativa”, en Grebe, *op. cit.*, pp. 223-282.

¹⁰ Por impregnación se puede entender el proceso por el cual la lógica neoliberal acaba cualificando relevantes políticas públicas, indistintamente de si son de corte civilizatorio general o de tipo opuesto, sea ganando en el momento de inclinar un accionar público que de suyo tiene más alternativas potenciales de desembocar que la finalmente neoliberal, afectando de antemano el destino de las medidas gracias a un ya bien entrenado discurso tecnocrático expuesto como neutral. La capacidad de impregnación neoliberal es inversamente proporcional, en lo que a ello toca, a una práctica crítica e innovativa del intelectual social.

plo de la reforma municipal, su sensatez era fruto de una coyuntura nacional puntual¹¹ y no tema de sustentabilidad civilizatoria general, algo que sí está implícito en el eslabonamiento territorial de un país.

Las querellas potenciales que existieron para *inclin*arlos desenlaces hacia la izquierda o la derecha en el marco de esta privatización capitalizadora,¹² fueron muchas, pero centrémonos sólo en una para ejemplificar una vez más el tema de la impregnación neoliberal. Es el tema del destino que se debía dar a los recursos del 50% del paquete accionario que como explicamos, luego del aporte privado de un equivalente al valor original de las empresas estatales que se invertía en ellas mismas, de manos del Estado pasaba a los ciudadanos, decidiendo —con innegable creatividad— que los dividendos financiaran un bono vitalicio a los bolivianos a partir de los 65 años de edad. Pero nuevamente resultaba un proceso de enajenación de empresas públicas que bajo determinados cuidados de procedimiento, bien puede ser apoyado e implantado por una alternativa de izquierda; la opción de un uso *asistencialista* de esos dividendos en desmedro de una centralización de los mismos para, por ejemplo, dirigir un plan de financiamiento a la manufactura a través de la misma empresa privada —y no de nuevas empresas estatales—, acabó, en realidad, impregnada —gracias a este elemento de lo asistencial— con el sello neoliberal de la antítesis social que Bolivia vive. Tómese en cuenta el valor total de las empresas estatales en cuestión equivalente al 30% del PIB boliviano del periodo, para tener una idea del volumen de los dividendos en cuestión.

3.3. *Los institutos discursivos preferidos del neoliberalismo boliviano*

Este destino *asistencial* de los famosos dividendos del modelo privatizador analizado nos remite a estructuras discursivas clásicas del neoliberalismo boliviano.¹³ En efecto, un rasgo que distingue en general al neoliberalismo de un liberalismo más puro es su preocupación tangible y de “buena fe” por el tema social. En el caso boliviano, este

¹¹ Nos referimos a una coyuntura que en lo social enfrentaba —alrededor del complejo empresarial estatal que atravesaba por un momento de crisis terminal en muchos aspectos— a los sindicatos especialmente fuertes dada su calidad de gremios de industrias no sólo de dimensión nacional, sino del Estado; los burócratas vinculados al Estado empresario y el patrimonialismo que le es típico; los consumidores y, por supuesto, los potenciales compradores que acabarían siendo foráneos.

¹² Entre otras querellas están las que tenían que ver con los grados de facilidades que el Estado ofrecía a los compradores potenciales sentando las bases de exclusividades de mediano plazo potencialmente conflictuadas con las expectativas de mejora en los consumidores, algo sensible para el caso de los sectores afectados, como fueron los de telecomunicaciones, generación de energía eléctrica o transporte ferroviario. El tema de la transparencia, sea en términos individuales de venta o en el repentino cambio de los mismos en medio del proceso, fue otro tema de querella. Finalmente, el grado de agudeza de los procedimientos del monitoreo de las promesas de inversión de cada comprador que, según dijimos, el modelo supone, se materializaría en cada empresa comprada; o en términos más generales, todo el tema de armazón de regulación posterior constituyó otros tantos campos potenciales de querella.

¹³ El grado de indolencia con la gravedad de la crisis estructural de la economía boliviana, o el grado de conformismo pleno con la falta de innovación, ha hecho que la peregrinación anual de cada gobierno boliviano a la reunión del Grupo Consultivo en París para solicitar a la comunidad financiera multilateral donaciones, regalos y préstamos blandos, se presente como un acto heroico y no como lo que es, un más bien penoso cuadro de heteronomía nacional. “En ese marco de relacionamiento con la comunidad

enfoque es sin embargo infructuoso en el largo plazo por las siguientes razones: es básicamente asistencial; definitivamente artificial en sus puntos de ataque; financieramente insostenible; en el fondo, de afanes disuasivos; y no pocas veces, cruel. Es básicamente asistencial pues despliega una enorme filantropía estatal de corto plazo que acabando un ataque más sonoro que efectivo contra la variada sintomatología de la pobreza. Una suerte de caridad altamente tecnificada y que, compuesta de varios millones de dólares, rebalsa anualmente para mitigar síntomas de pobreza. Por eso es común observar a gobernantes neoliberales bolivianos de turno declarando con satisfacción que, desde el presupuesto público, “dedicarán” más que el anterior gobierno al “gasto social”. El grado de cortoplacismo de los neoliberales bolivianos¹⁴ es tal que una medida como la de la municipalización radical comentada, no es inmediatamente clasificada por ellos como “social” porque puede —por lo menos teóricamente— no alterar sustancialmente los montos absolutos de inversión pública agregada en la partida “gasto social”, con lo que se desconoce equívocamente los reales efectos de redistribución interna y subsidiarización que, inclusive bajo la premisa de un mismo volumen absoluto de gasto social, ella aporta, por esos impulsos cualitativos, comparados con un mero incremento cuantitativo del gasto llamado “social”.

Este gasto social está además asociado al segundo elemento mencionado: el de la artificialidad de los puntos de ataque. Evidentemente, el neoliberalismo boliviano se autoentiende como social a través de categorías como “inversión social” o “capital humano”. Pareciera que la aversión esencial que el neoliberalismo boliviano carga contra la parte real de la economía, se pudiera disimular empleando palabras tan “industriosas” como “inversión” (social) o “capital” (humano). Así, “inversión” o “capital” parecen darle a todo el sistema una configuración relativamente productivista que libra de culpa al neoliberalismo de la tragedia industrial de Bolivia, pues se estaría “invirtiendo” y gastando en “capital”. En cuanto a la artificialidad referida, las variables de salud o educación, o de “gasto social”, tienen muy diferentes formas de “radiación” según se trate del grado de desarrollo de un país. No obstante, gran parte, si no toda la nomen-

internacional —sostuvo en junio de 1999 el vicepresidente boliviano en ocasión de su peregrinación ritual a París— se puede avanzar más rápido en la lucha contra la pobreza” (periódico *La Razón*, La Paz, 28 de junio de 1999). En esa oportunidad, Bolivia negoció 980 millones de dólares, la mitad a título de donación. Para tener una idea de las proporciones, tómese en cuenta que el presupuesto de inversión pública para Bolivia en 1998 se estimó en algo más de 500 millones de dólares (*La Razón*, 6 de febrero de 1998). La emoción del vicepresidente al elogiar la donación y condonación como “políticas”, demuestra que el discurso neoliberal está presente tanto en la tecnocracia como en los científicos sociales de tipo meramente especulador.

¹⁴ Durante el gobierno de Paz Zamora (1989-1993) se presentó la “Estrategia social boliviana” (*Estrategia Social Boliviana*, 1991, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, La Paz) como el salto más importante en este campo de política. En ese documento —repleto de la insuficiente visión de lo social como incremento de gasto público sectorial y de generalizaciones que invocan a una mayor coordinación— están ausentes cualesquiera referencias —aunque sean “premonitorias”— de lo que habría de ser posteriormente la LPP, que sí fue una medida social. Pues si no ¿cómo catalogar una disposición que como la LPP logra que la inversión municipal haya pasado del 3% a más del 30% de la inversión pública nacional? (cifras tomadas de Galindo, *op. cit.*).

clatura¹⁵ que ha capturado el lenguaje de nuestros últimos gobernantes, viene tomada mecánicamente del discurso social de países maduros y generalmente opulentos. En el caso boliviano, por ejemplo, una buena parte del gasto en educación es absorbida por un insostenible sistema universitario fiscal. Pero ¿se compadece semejante gasto *vis-à-vis* las asfixiantes demandas no ya de una educación básica precaria sino de un aún expandido grado de analfabetismo nacional? ¿Es la relevancia y el eslabonamiento del gasto en el llamado “capital humano” lo mismo para el Brasil, para Bolivia o el Japón?¹⁶

El panorama es más sombrío en Bolivia, pues el grueso de las fuentes de financiamiento de las llamadas “políticas sociales” es recurso adictivo: donaciones externas, préstamos blandos multinacionales, recursos de la cooperación internacional. Esta combinación de asistencialismo, forzamiento de criterios y adicción financiera degradan en extremo una mejoría posible de las condiciones de vida que sea duradera. Por ello en realidad, el enfoque social del neoliberalismo criollo no deja de ser cruel pues, no consciente de los rasgos descritos, suele ilusionar con una “lucha definitiva y quinquenal” contra la pobreza cuando, en el fondo, toda este activismo social de corte neoliberal acaba funcionalizando la búsqueda de algún grado de disuasión de posibles reacciones violentas dada la filosa precariedad en la que seguirán viviendo grandes sectores de la población.

Cuando en Bolivia, al calor de los debates en torno al citado bono de vejez financiado por los dividendos de las acciones fruto de la privatización anotada,¹⁷ se conoció la

¹⁵ Para el caso de pasar de la noción de “gasto social” a la de “inversión en capital humano”, véase por ejemplo la referencia en el trabajo de Roberto Laserna. “Reforma del Estado y políticas sociales en Bolivia: los desafíos del desarrollo humano sostenible”, en Carlos Vilas (coord.). *Estado y políticas sociales después del ajuste*, UNAM/Nueva Sociedad, Caracas, 1995, pp. 47-71. El carácter importado de la nomenclatura es especialmente contrastante en los documentos oficiales que regularmente los gobiernos bolivianos editan para plantear sus estrategias de largo plazo, y esto es cada vez más notorio.

¹⁶ Un análisis que sí analiza con cautela las condiciones bajo las cuales la inversión en “capital humano” puede lograr un retorno —anotando a propósito que precisamente el proceso de industrialización inglesa no dependió de este factor— es el hecho por Theodore Schulz, “Investment in Human capital”, *The American Economic Review*, marzo, 1961, vol. LI, núm. 1, pp. 1-17. Los repetidores de la teoría del capital humano tampoco se percatan del mayor grado de imperfección del mercado para este tipo de capital incluso en economías desarrolladas. Menos se percatan de que un tema complejo —con razón lo tematiza Schulz— es discernir qué parte del gasto en educación, por ejemplo, es parte del consumo o de la inversión. Se puede sospechar que a mayor pobreza, mayor es el carácter de satisfacción de las preferencias del consumidor en un sentido de “consumo puro”.

¹⁷ Los debates fueron intensos en el tiempo previo a la decisión final, todavía durante el gobierno de Sánchez de Lozada, en donde el hecho de que se vislumbrara una desviación del modelo original del “Plan de todos” no fue la última causa que había sugerido centralizar esos dividendos en un fondo de proyectos sociales. Pero más agria fue la polémica cuando, luego de que se hubo materializado el primer pago vitalicio, el flamante nuevo gobierno atacó el método adoptado. Así, una de las medidas de su antecesor que el nuevo gobierno del ex dictador Bánzer modificó mediante la Ley 1864 de junio de 1998, fue justamente el componente de distribución de dividendos para la vejez (y gastos funerarios) aprobado por el gobierno de Sánchez de Lozada en el marco de su modelo de privatización capitalizadora. El debate creció pues Bánzer en la campaña electoral se había comprometido públicamente a respetar el modelo ya aprobado. Así el “Bonosol” —como se llamaba al pago de dividendos a bolivianos mayores de 65 años elegibles a diciembre de 1995— fue sustituido por el “Bolivida” que implica ahora el uso de sólo 30% de los “certificados fiduciarios” que se agrupan en el “Fondo de capitalización co-

idea de usar esos dividendos en “inversión de carreteras”—no se mencione ya las ideas de usar los dividendos en salud o educación, lo cual nos regresaría al tema del enfoque neoliberal de lo social ya visto—, afloró otra de las constantes discursivas del neoliberalismo boliviano. En efecto, el permanente subrayado del gasto en “infraestructura”—otra forma que usa para escapar al riesgo de ser tildado de antiproductivo— es otro rasgo peculiar del enfoque neoliberal boliviano.¹⁸ Una revisión de la composición del gasto público desde 1985 demostraría la fuerte incidencia de este tipo de gasto frente al total del gasto público, pero al mismo tiempo la debatible correlación directa de esto con impulsos de crecimiento económico, menos de rebalse social del mismo. Con todo, valgan dos aclaraciones pertinentes: por un lado —como en cierta forma vale para los gastos en salud y educación— no es que una alternativa al neoliberalismo no gaste en la llamada “infraestructura”. Por el otro lado, no es que durante la tesis estatizante post 1952 no se haya dado tal gasto.¹⁹ Se trata en realidad de calibrar el estatus y los eslabonamientos de ese gasto en el marco de la globalidad de las políticas económicas durante grandes tramos de cada fase histórica para entender mejor su organicidad con la época.²⁰ Sin mencionar que la adopción de determinada configuración de gasto público implica siempre una opción de gasto *en vez* de otras. Se trata por tanto no sólo de atender lo social o lo infraestructural, sino de sentar claras prioridades de inversión pública de largo plazo alrededor de estas variables, y las otras le son opcionales.

Llegados a este punto vale la pena mencionar otro elemento revelador de la concepción neoliberal que tiene que ver con el tema del mercado. Esto que podríamos llamar un *elogio necrofílico del mercado*, pues se idolatra un dispositivo preciso y precioso en el paradigma neoclásico de la doctrina económica dominante,²¹ pero muerto en la

lectiva” resultante del proceso de privatización, para personas mayores de 50 años en diciembre de 1995. El 70% restante se convirtió en “Acciones populares” que no se encuentran ya necesariamente condicionadas en su uso a fines de una anualidad vitalicia, sino a ser redimibles por dinero (art. 9/c), donadas a un fondo asistencial (art. 11) o cedidas a un fondo público que los emplearía en obras viales (art. 13) o a ser empleadas como garantía para créditos de vivienda (art. 23).

¹⁸ Del monto negociado en el Club de París comentado más arriba, el gobierno anunció dedicar 40% de los fondos a caminos y comunicación (*La Razón*, 28 de junio de 1999).

¹⁹ En el periodo de 1960 a 1969, el porcentaje de la inversión pública en el sistema infraestructural de transporte fue del 33%, o sea contundentemente mayor frente a las demás partidas individuales. Véase *Estrategia socioeconómica de desarrollo nacional*, tomo 1, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, La Paz, 1970.

²⁰ Fue así como la acción estatal en pro de la vertebración ferroviaria desde 1880 hasta 1920 estuvo orgánicamente articulada a la fuerza de la minería exportadora boliviana y aparecía como sostenedora de un proyecto económico concreto. Lo propio sucedió con otra ola pro “infraestructura”, esta vez en carreteras, propuesta a partir de los años cuarenta del siglo XX y que acabó abriendo el hasta entonces secundario espacio que representaba el oriente boliviano, lo cual propició un arranque agroindustrial. Aquí también el tema carretero era soporte de una estrategia concreta que como la ferroviaria de fines del siglo XIX, tuvo grados medibles de efectividad (véase la estrategia diseñada en los años cuarenta por una misión norteamericana en el *Plan Bohan*, 1988. Editorial Carmach, La Paz).

²¹ Para una reveladora sistematización de las debilidades estructurales del enfoque neoclásico en el análisis económico predominante, véase Geoffrey Hodgson, “The Approach of Institutional Economics”, *Journal of Economic Literature*, marzo, 1997, vol. XXXVI, núm. 1, pp. 166-192.

realidad pues el mercado que el neoliberal totémiza es el de régimen de competencia perfecta.²² Pero la misma evolución de esta economía degenera de una forma muy natural las posibilidades de una competencia perfecta y engendra formas que justamente atentan contra una guía altamente despersonalizada de las decisiones de los actores económicos. Es cierto que los neoliberales conceden en voz alta que el mercado puede ser eficiente en la asignación económica, pero no en la social. Es justo con base en esto que, como haciendo una gran concesión, proclaman entonces su convicción sobre la necesidad de instancias de regulación y, como ya hemos visto, logran así adicional alivio discursivo.

Con relación al tema “mercado”, no sólo es importante sistematizar todas aquellas medidas concretas que han significado un mayor margen de operación para el mercado desde 1985 en Bolivia con innegables efectos positivos. En general, el neoliberalismo suele llevar a un mayor sinceramiento de los precios del capital y otros factores productivos. Pero es igualmente importante crear conciencia sobre tres elementos centrales: a) la temática del mercado como contrapuesta al tema de la propiedad privada o estatal en los medios de producción; b) el mercado como tema contrapuesto al de la planificación pública y social; y c) la naturaleza del desarrollo mercantil de una economía como la boliviana.

En cuanto al primer punto, está demostrado que los efectos nocivos de una economía crecientemente regulada de modo “institucional”, como cuando son crecientes formas de competencia imperfecta las que prevalecen en la economía, pueden más que neutralizar los efectos positivos de una reducción de la propiedad estatal en los medios de producción. Esto se ve en Bolivia, donde los costos para la sociedad, provenientes de largos acuerdos de exclusividades para los capitalizadores u otros agentes privados de empresas públicas ya monopolísticas antes de la capitalización privatizadora, pueden distorsionar tarifas y poner en duda la calidad de ciertos servicios.²³

En segundo lugar, debe subrayarse que el fundamentalismo neoliberal en torno al mercado implica un premeditado desprestigio creciente de acciones de planificación, en especial de aquellas esperables en los operadores públicos estatales. Yendo un poco más allá, se puede identificar en este punto uno de los efectos más nocivos del neoliberalismo hacia la sociedad misma: el de la instauración de un incertidumbre que se difumina por toda ella. Es cierto que, como en el caso de las apariencias “productivistas” descritas arriba, el neoliberalismo criollo no dejará nunca de mostrar actos formales de “prospección futura”, de una preocupación por el “largo plazo”, como cuando edita

²² Para un análisis clásico de las paradojas del “mercado” que generan su propia negación —ilustrativo también por la visible angustia del autor al constatarlo— véase Friedrich Hayek, *The Road to Serfdom*, The University of Chicago Press, Chicago, 1972. Para Polanyi (*op. cit.*, p. 150), el liberalismo económico incluso puede oponerse al *laissez-faire*.

²³ A principios de noviembre de 1999, el superintendente de Telecomunicaciones de Bolivia reconoció oposición de la empresa capitalizada en telecomunicaciones a que se adjudicara la licencia para un tercer operador en telefonía móvil (*Los Tiempos*, 5 de noviembre de 1999). El otro operador ya existente en el rubro de telefonía móvil a su turno espera que se liberalice el mercado de larga distancia internacional en manos exclusivas de la empresa capitalizada (*idem*).

“planes de desarrollo nacional” o convoca para que élites pensantes y tributarias de una suerte de politología zodiacal, den su oráculo de la “Bolivia del próximo milenio”.²⁴ Pero el excesivo generalismo que suele caracterizar tales documentos²⁵ simplemente corrobora la inexistente vocación planificadora sería de la fase neoliberal criolla. ¿Cómo se puede querer planificar el mediano y largo plazos si más bien todos saludan un continuismo sobre la base de la estabilidad monetaria y la primacía del mercado como puntos cúlmines que ya no permitirían mayor variación u opción para la sociedad que la de dejarse llevar pacíficamente hasta donde esta “racionalidad de la época” lo permite?

El otro punto mencionado está referido a la naturaleza del fenómeno mercado en nuestra realidad. Yes que evidentemente no sólo estamos ante un mercado imperfecto —donde está relativamente asentado— sino además ante uno *incompleto*. Pues la realidad económica boliviana contiene una innumerable cantidad de irregularidades en su estructura mercantil. Lugares donde la moneda juega un rol marginal o donde gran parte de la producción es para el autoconsumo, y espacios donde restricciones de carácter físico inhiben relaciones mercantiles desarrolladas. Una política económica que no dé cuenta concreta de estas realidades opera sobre un porcentaje importante pero parcial de la realidad nacional.

Es a la luz de este último punto que podemos engarzar ahora el apelativo de “criollo” que hemos procurado emplear constantemente en este texto a tiempo de hablar del neoliberalismo boliviano.²⁶ Y es que éste tiene tres rasgos sustancialmente peculiares. Por un lado, se desenvuelve en medio de la más grande precariedad institucional

²⁴ La intelectualidad hegemónica especializada fue tratada, como dijimos, con indiferencia por Sánchez de Lozada y, al ser de insignificante utilidad su estilo analítico para fines de operación práctica de políticas públicas, y mucho menos útil para proveer una proyección plausible de tendencias sociales, se explica en buena medida la actitud displicente del presidente de Bolivia de ese entonces hacia los pensadores y sus ciencias. Pero explica en parte también cómo, “a minutos” de que Bánzer asumiera el poder, connotados representantes de esta intelectualidad hegemónica que había sido marginada del diseño y operación de las grandes reformas fungieran como moderadores del llamado “diálogo nacional” que impulsara el ex dictador para legitimar, a inicios de su gobierno, en consabidas sesiones de seminarios y ponencias especulativas, una base de acción gubernamental. Como era previsible, en los resultados del “diálogo nacional” campearon las generalidades y las visiones de largo plazo repletas de lugares comunes.

²⁵ Conforme avanza el periodo neoliberal, crece el estilo inasible y de importación acrítica de la nomenclatura internacional en los documentos estratégicos de los gobiernos bolivianos. Incluso el gobierno de Sánchez de Lozada, siguiendo el rito de editar su visión estratégica, recrudesció —en franco contraste con la creatividad de su realidad operativa— las generalidades. Compárense los respectivo documentos representativos de los gobiernos desde 1985: *Estrategia de desarrollo económico y social, 1989-2000*, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, La Paz, 1989; *Estrategia nacional de desarrollo*, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, La Paz, 1992; *Plan de Desarrollo Económico y Social, el cambio para todos*, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, La Paz, 1994.

²⁶ Cuando no referimos al ideario que el neoliberalismo boliviano ha ido sistematizando no sólo, pero e pecialmente mediante la labor, no exenta de aportes puntuales, de la intelectualidad boliviana hegemónica, debe tomarse en cuenta que no es sólo alrededor de temas de política económica sino más bien por la vía de la sobreacentuación de temas cuyo estilo de análisis genera una trivialización del método científico sobre la base, además, de una extravagancia no innovativa en la selección de los mismos objetos de estudio. De ahí que lo afamados texto de Toranzo sobre la “diversidad cultural” bo-

imaginable del Estado. Este hecho debilita gran parte de las premisas del neoliberalismo originario que sustenta parte de su perspectiva justamente en la existencia de un marco estatal serio y desarrollado. La precaridad mencionada se hace patente por ejemplo cuando se tienen que instalar mecanismos de regulación desde el Estado para proteger a la sociedad de los desmanes potenciales de los oligopolios. Cualquier neoliberalismo es tanto más tolerable —más allá de si es recomendable sin una masa crítica de riqueza nacional previa acumulada— cuanto más desarrollada esté la capacidad institucional del Estado para operar. Pero lo criollo de nuestro neoliberalismo se explica también por su despliegue en medio de un grado agudo de subdesarrollo y pobreza. Las fuentes para un rebalse menos injusto de la riqueza a la sociedad, rebalse no ausente ni en el neoliberalismo maduro de los países desarrollados, son inexistentes o ínfimas. Los *slogans* muy válidos y quién sabe si exitosos del neoliberalismo global sobre, por ejemplo, la temática del “capital humano”, parecen sarcasmos en nuestra realidad. Finalmente, lo criollo se funda en el ya mencionado tema de los mercados incompletos.

Al lado de las características ya mencionadas, la obsesión por la parte monetaria en desmedro de la llamada parte real de la economía²⁷ es otro distintivo del neoliberalismo como interpretador y operador de políticas económicas. Así pues, la degradación de afanes planificadores, la persecución obsesiva de una conformación de precios lo más “higiénica” posible y la recién mencionada aversión al sector real de la economía, aclaran en gran parte la carencia de políticas industriales serias en Bolivia.²⁸

liviana se cuentan entre los paradigmáticos del periodo por las conclusiones, afirmaciones y métodos que emplea. Éste es un autor que ha pasado de calificar las experiencias de Vietnam o de Cuba como “bofetadas” a quien no creyera en las leyes dialécticas de la historia (véase Carlos Toranzo, “Marx: La densidad de prologar *El Capital*”, *Ensayos*, vol. II, núm. 5, 1985, pp. 3-14), y a través de un análisis cuestionable aunque/ya que ortodoxo de las clases en Bolivia (cf. Carlos Toranzo, *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia*, Ildis-Unitas, La Paz, 1989); al estudio de la “diversidad” cultural que decíamos cierra esta transición, pero en especial caracteriza, por su estilo, al clásico intelectual vehículo del espíritu neoliberal que Bolivia vive (para su aporte al tema de la “diversidad”, véase Carlos Toranzo, “Lo Pluri-Multi” en el periódico *Presencia* del 6 de agosto de 1993).

²⁷ El pedido de alguien como R. Coase para que de una vez el análisis económico vuelva a atender procesos de la economía real, parece un síntoma más para abrir al fin la esperada veta de renovación del análisis económico. Véase Ronald Coase, “The New Institutional Economics”. *The American Economic Review*, vol. 88, núm. 2, 1998, pp. 72-74.

²⁸ Es justo el arribo citado Plan Bohan —que está unido a la creación de la Corporación Boliviana de Fomento como centro, entre otras cosas, de incubación industrial— el aislado caso en esta mitad de siglo en que no sólo se esbozó, si bien no como elemento central, una política industrial, sino que ésta comportó una efectividad bruta tal que permitió, en parte, que en Bolivia la privatización clásica y nada creativa entre 1989 y 1993, tuviera del todo *qué* privatizar. En 1965, la porción porcentual de la manufactura en el PIB era del 13% (*Estrategia, op. cit.*, p. 54). Treinta años después es del 16% (véase *Información Estadística*, Instituto Nacional de Estadística, La Paz, 1999). Es lógico que entre todas las alternativas que se debatieron en los últimos años sobre el destino de los recursos de la capitalización, la eventualidad de centralizarlos para financiar un fondo de apoyo agresivo a la manufactura nacional en manos privadas no haya sido considerada ni de la manera más remota. En realidad, los párrafos sobre políticas industriales existentes en cada uno de los planes estratégicos nacionales mencionados, no deben ser tomados al pie de la letra en tanto que la práctica y, en especial, los logros concretos en relación, por ejemplo, con la aficción de la composición sectorial del valor agregado boliviano, no reflejan reales capacidades y voluntades de fortalecer el sector secundario de la economía.

3.4. ¿A quién atribuir finalmente los males?

Llegados aquí podemos plantear otro tema crucial. En efecto, descubriremos que muchos males usualmente atribuidos al neoliberalismo, le son injustamente asignados. Existen por lo menos otras tan o más importantes fuentes de explicación para la pobreza, el subdesarrollo y la exclusión social. Por un lado, todo aquello cuya forma de funcionar se explica no ya por el paquete de cosas que implica lo neoliberal criollo, sino por la estructura de producción (las relaciones y las fuerzas productivas correspondientes) que caracteriza nuestra economía. En términos más sencillos, no sólo del *mercado* pueden provenir ciertas injusticias o desequilibrios sociales, sino del *capital* entendido como relación social. El dilema es que el discurso neoliberal ecuménico ha tenido la impresionante capacidad de dar a entender que todo mal social no puede ser ya explicado, por ejemplo, por razones de explotación capitalista o por rezagos en el mismo desarrollo capitalista. De esta forma, ante los amotinamientos sociales e ideológicos recurrentes, se expone hábilmente la cabeza del “mercado” para permitir que el descontento se vacíe sobre éste, eliminando cualquier explicación que, como en tiempos pasados, hurgara sospechosamente más al fondo. No es por tanto—dirán los neoliberales—que haya capitalistas o disfunciones endémicas en la reproducción de la estructura económica que pudieran explicar tal o cual fenómeno; es sólo el mercado el que a veces suele fallar. De aquí ya no es largo el trecho hasta el punto en el cual, consecuentemente, no hay clases y menos confrontación entre ellas, sino una masa amorfa de ciudadanos consumidores.²⁹ Pero es de central importancia que en el futuro se vuelva a indagar realmente qué problemas vienen del mercado y su funcionamiento y cuáles vienen más bien explicados por la organización social de la producción, digamos, independientemente de cómo ésta se traduce en la esfera misma de la circulación, es decir, el mercado. Esta compleja tarea se justifica por varias razones.

a) Primero por razones prácticas de política económica,³⁰ pues es una cosa muy distinta creer que se puede redistribuir riqueza desde el Estado buscando compensar

²⁹ Incluso en un análisis que puede ser sospechoso de todo menos de ortodoxia en el análisis de las clases, puede verse una propuesta que apuesta por una conexión de las clases—como agentes en un “espacio social” desplegado “tridimensionalmente” en lo económico, social y simbólico—a la tenencia de poder sobre diversas formas de capital. Véase Pierre Bourdieu, “What makes a social class? On the theoretical and practical existence of groups”, *Berkeley Journal of Sociology*, vol. 32, Berkeley, 1987.

³⁰ La política económica boliviana desde 1985 está cohesionada alrededor de la estabilidad de los precios, la privatización, la desregulación y la administración de donaciones y créditos blandos de organismos multilaterales para financiar partes importantes y predefinidas por estos mismos organismos, del gasto fiscal (en especial infraestructura, salud y educación) en el marco de la gendarmerización del Estado. Por tanto, se advierte un perfil de política económica centrado en la esfera de la circulación y la atención, con recursos no internos, de los índices estándar de pobreza. Heterodoxo fue sin duda el sesgo productivista del modelo de privatización de las grandes empresas ya anotado. Pero a pesar de este elemento inversor, el carácter de limitada—cuando no ínfima—capacidad de afección *estratégica* y directa de la base productiva que informa todo proceso de privatización, puede desprenderse del crecimiento del PIB insistentemente insuficiente y estable, desde 1989 a 1998—excepto en un año—debajo del 4.76% (cf. *Información Estadística*, Instituto Nacional de Estadística, 1999, La Paz, y *Estadísticas Económicas*, Asesoría de Política Económica, Banco Central de Bolivia, 1999, La Paz). Para 1999 se estima oficialmente un crecimiento incluso por debajo del 3% (*La Razón*, 11 de octubre de 1999). Pero justo entre 1989 y 1999 se produjo el grueso de las privatizaciones bolivianas, sean clásicas o no.

una distribución del producto social, así como ésta ocurre dadas las formas capitalistas de apropiación, y otra muy distinta hacerlo creyendo que tales medidas pudieran ser respuestas a deficiencias del mercado. En otros términos, ciertas medidas de política económica más que focalizarse contra el neoliberalismo, tendrían que amortiguar al capital y sus inherentes contradicciones. Pueden seguir los operadores públicos bolivianos invirtiendo años en la manipulación de las variables privilegiadas del procedimiento neoliberal, pero será sólo recomblando las estructuras de producción que Bolivia puede aspirar a un cambio por mucho que esta recombinción de variables capitalistas se haga precisamente sin pretender ya trasponer el capitalismo mismo. En todo esto existe una palmaria paradoja, pues mientras una peculiar distribución insatisfactoria de la riqueza se debe a la lógica del capitalismo, por otro lado, su versión exacerbada de injusticia resulta de la falta de desarrollo del mismo. De lo cual se derivan tres conclusiones: *i*) no es posible proclamar una justicia idílica pues la injusticia, hasta cierta masa crítica, es condición del desarrollo social; *ii*) debe iniciarse una real política de relanzamiento capitalista en Bolivia secundarizando los fanatismos “monetaristas” de estabilización; *iii*) debe hacerse un sofisticado diseño para amortiguar los efectos antisociales provenientes de las fallas del mercado, pero en especial, de aquellos dimanantes del desarrollo capitalista mismo, cosas distintas.

b) En segundo lugar porque la discusión nos acerca nuevamente a un por ahora descuidado análisis de las clases sociales en pugna.³¹ ¿Es posible medir la real incidencia de los intereses de clase en las diferentes gestiones gubernamentales pasadas? ¿Es serio sostener que el ajuste estructural boliviano de 1985 fue un proyecto de la banca, los importadores y la minería mediana? Si eso es así, ¿no es una opción, pro exportadora, afectadora de la inflexibilidad del interés bancario y de decidida opción por el valor agregado industrial, una potencial confrontación con las anteriores fracciones de clase dentro de la misma burguesía?, y finalmente ¿deja de ser izquierdista el que se apuntale tal opción?

c) La tercera utilidad viene de entender que el neoliberalismo es una forma más de manifestación del capitalismo, sea éste desarrollado o no; que eliminar al neoliberalismo no es sinónimo de eliminar al capitalismo. Sin duda que el discurso neoliberal ha intentado que creamos que capitalismo es sinónimo de neoliberalismo.³² El neoliberal

Y si bien son Paz Zamora y el mismo Sánchez de Lozada los que demagógicamente evangelizaron con un salto del crecimiento del PIB como resultado de sus privatizaciones en sus periodos de gobierno, era obvio que las mismas no sólo requerían un plazo largo de evaluación, sino que incluso en el hipotético caso de haberse detectado un tal repunte, éste difícilmente podía haber sido atribuido finalmente —desde un punto de vista técnico— a las privatizaciones efectuadas.

³¹ Sobre el tema de las clases desde 1985, véase por ejemplo Tyrone Henrich, “Apuntes sobre la nueva política económica” en *Repensando el país*, MBI, Editores, La Paz, 1987, pp. 46-60. Véase igualmente las ideas de Toranzo en “Nueva derecha...”, *op. cit.* Volver al tema del capital, de la estructura económica, produce una conexión natural con el análisis de las clases, mientras que la monoteización del concepto “mercado” en el análisis tiende a eliminar la necesidad de un subrayado, por no hablar de un análisis de las mismas.

³² Junto a Toranzo, el sociólogo Fernando Calderón es otro de los esforzados analistas de la escuela que venimos analizando. El análisis indiferenciado que ha fundido el mercado a lo económico, plantea

abusa de la aplastante y útil convicción finisecular de que el capitalismo es contemporáneamente insuperable, al estirar esta insuperabilidad hacia lo que no pasa de ser una forma más de capitalismo. Con ello alcanza dos logros: imbuir de resignación ingenua a los potenciales actores contestatarios del neoliberalismo y paralelamente, acabar por extirpar el término “capitalismo”, sutilmente sustituido así por una noción menos sospechosa: el mercado. La tercera utilidad es pues, finalmente, referida centralmente a poder al fin entender que se puede optar por la *reforma* del capitalismo frente a la salida fantasiosa de su liquidación *revolucionaria*, pero sin creer ya que el neoliberalismo sea el único o esencial modo de existencia del mismo.

Vale la pena anotar que, si bien la idea de la insuperabilidad contemporánea del capitalismo desde el seno de los movimientos de izquierda no es nueva, es hasta bien entrados los años ochenta que en Bolivia se internaliza, entre para quienes esto revestía importancia, la idea de que la posibilidad de un derrumbe estrepitoso del capitalismo, en creciente “descomposición”, era definitivamente un sinsentido. A pesar de aquellos analistas bolivianos que creyeron indispensable alejarse del marxismo para anunciar la estabilidad del capitalismo,³³ fue dentro de las filas de un mismo marxismo creativo —el movimiento revisionista que a finales del siglo pasado desembocara

finalmente el deleznable chantaje analítico de hacer temer a quien critique a la “economía de mercado” más allá de reconocerle “fallas”, el estar poniendo en duda la economía en su ontología. Esta fundición es perceptible en el prólogo de Fernando Calderón, *Ahora sí que sí y sí no por qué no. Gobernabilidad, competitividad e integración social*, Cedla/Ceres, La Paz, 1995. No es que el autor —ya que la fundición categorial en cuestión es patrimonio discursivo generalizado— no toque la problemática de la “producción” o del sector real de la economía, sino que los subjerarquiza como alimentadores de esa categoría central que es el mercado. Cuando, en el mejor de los casos, abogan por relativizar el mercado, no es para buscar lo que pudiera estar “detrás” del mercado, sino lo que está como *primus inter pares* “al lado” del mercado. Por eso es que entre líneas el par conceptual para ellos sea “falla de mercado-corrección desde un Estado reducido” (véase en esa línea Fernando Calderón y Roberto Laserna, 1995, *Paradojas de la modernidad*, Los amigos del Libro, Cochabamba, pp. 65 y 93) y no por ejemplo, debido a la fusión cognoscitiva dicha, “falla de mercado-falla/éxito del capital” o “falla del mercado-debilidad de otros subsistemas” también económicos. Es en Calderón donde también se tiene expuesto otro de los rasgos propositivos típicos, que explica mejor la esterilidad proyectiva técnica del científico social hegemónico en Bolivia. En efecto, la no proyección científica de los fenómenos sociales es algo más bien elevado a virtud. Es por eso por lo que Calderón sostiene, en el último texto citado, en relación con reformas como la LPP o la capitalización, que nada, en torno a su desembocadura, estaba predeterminado (pp. 79, 92 y 94). Pero hemos visto que más bien fue al contrario: la falta de una predicción tendencial oportuna, técnicamente factible, de los sentidos de impregnación de la época sobre las medidas —pues todo estaba más bien muy claro— fue lo que también impidió una querrela más efectiva para inclinar las desembocaduras. De suyo la LPP tiene un núcleo que de hecho es civilizatorio y no es mercedora de antemano ahí de ninguna “incertidumbre” futura. Pero era claro que estaba destinada a arrancar y acabar con fuertes sesgos neoliberales y así fue como acabó la capitalización en el tema de los dividendos. No se enfrentaban pues medidas nacidas sin la más mínima intención epocal, sino más bien como medidas que al parecer buscaban pasar inadvertidas en su sexo. La explicación clerical del analista social reforzó este proceso de aparente inocencia estratégica. Otro autor que junto a Calderón y Toranzo es parte de la escuela y escribe en la línea de la fusión mercado-economía es Gustavo Fernández. Véase “Sistema de partidos y agenda de gobernabilidad”, en *Agenda Nacional de Gobernabilidad Democrática*, PUD/Milenio/Ildis, La Paz, 1997, pp. 11-39, 13 y 19.

³³ Uno de los casos comentados de alejamiento de un pasado marxista intenso es el del autor Carlos Toranzo.

en la corriente del reformismo socialdemócrata— donde se sintetizó de manera acertada esta disyuntiva al plantear que: *i*) no habrá derrumbe porque el capitalismo es enormemente apto para equilibrarse; *ii*) una dictadura del proletariado sería antidemocrática; *iii*) no se produce la tal polarización de clases; *iv*) tampoco se ha corroborado la hiperconcentración del capital que supersimplificaría las contradicciones sociales; *v*) no hay meta última en el avance social; *vi*) el capitalismo es socialmente reformable; *vii*) si el término “socialismo” tiene algún sentido es el de un mejoramiento social incremental en el marco del capitalismo; *viii*) es fundamental un perfeccionamiento de la legalidad en la sociedad; *ix*) deben encontrarse eslabones de organización territorial para redistribuir poder y lograr subsidiaridad; *x*) debe apoyarse la organización civil de la sociedad.³⁴

Consecuentemente, la única forma imaginable de interpelación al orden establecido es una que ya no puede cuestionar la intimidad organizativa del sistema. La estrategia de acción es una que apunta hacia la generación de propuestas creativas para acortar las brechas de atraso estructural, las inequidades derivables del capital y los efectos de una sujeción ingenua a la inercia neoliberal centrada en el mercado. Pero ni la más exitosa realización de estas aspiraciones nos conducirá al cuestionamiento del orden capitalista. Lo revolucionario radicaría por lo tanto en desarticular la versión neoliberal criolla de nuestro capitalismo atrasado sin poder ni tener ni querer dejar el capitalismo; pero entonces este acto *revolucionario* es nada más un rasgo nuclear de un *reformismo* consecuente.³⁵

En este contexto, nótese que por paradójico que parezca, en Bolivia, ni la tesis post 1952 ni su antítesis presente podrían ser calificadas de proyectos enteramente burgueses o si se prefiere consecuentemente burgueses.³⁶ Es, por el contrario, un hecho que la síntesis social no-neoliberal que debe pretenderse, tenga que hacerse en torno a una estrategia con aquellas fracciones de la burguesía que son indispensables para superar al neoliberalismo criollo. Una estrategia que busque dismantelar el *modus operandi* neoliberal imperante —sin moverse un ápice de la jurisdicción histórica que delimita la formación social capitalista— estará orgánicamente vinculada a sectores de la burguesía amenazados a largo plazo por la aplicación del neoliberalismo. En otras

³⁴ Hoy sigue siendo revelador el trabajo de hace 100 años de Eduard Bernstein [1899], *Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie*, Dietz Verlag, Bonn, 1973.

³⁵ Este reformismo consecuente sería pues el portador de una síntesis que recupere/supere la antítesis social boliviana que representa el neoliberalismo. Pero es un proyecto incipiente, por no decir totalmente desarticulado, en la Bolivia contemporánea. La potencial opción de que esto germinara fue desperdiciada cuando las fuerzas de izquierda de la coalición gubernamental entre 1993 y 1997 —en especial el Movimiento Bolivia Libre y el vicepresidente Cárdenas— como dijimos al inicio, capitularon en las querellas por desembocaduras no neoliberales a las grandes reformas aquí discutidas.

³⁶ En la revolución de 1952 —sostuvo el desaparecido analista René Zavaleta— “todos perseguían fines burgueses menos la burguesía”. Véase la entrevista de Roberto Laserna, “Bolivia: Crisis de Estado. Una entrevista inédita con René Zavaleta Mercado”, *Historia Boliviana-Revista Semestral*, 1985, vol. 1-2, Cochabamba, pp. 139-147.

palabras, la síntesis no-neoliberal es, desde cierta perspectiva, un proyecto (también) burgués.

Con todo, dos grandes falencias del periodo post 1952 boliviano han hecho de la antítesis neoliberal vigente algo contundente: la gran incapacidad del aparato estatal para ejercer un intervencionismo competente y la lección, aparentemente irrefutable, de que no hay modelo que ponga de relieve valores comunitarios o pretenda cierta preocupación por atender a los sectores desvalidos, como no sea a costa de la inmanejabilidad de los costos financieros.

Finalmente, ya que hemos tocado el contexto de las relaciones de producción, es oportuno añadir que otro rasgo del neoliberalismo criollo es que al haber despreciado el análisis económico-político, ha propagado, como caja de resonancia de la realidad económica del centro, que el futuro de Bolivia estaría afincado en cómo se engarza en las tecnologías de último nivel el aprovechamiento del conocimiento y una simplista incorporación del concepto de “globalización” cuando al contrario, para Bolivia, la alternativa parece inclinarse más bien por un redescubrimiento y aprovechamiento de las ahora desestimadas ventajas comparativas “estáticas”, las tecnologías medias y la industria ligera.

Indudablemente son varias las resultantes provechosas que, de o con, el neoliberalismo deben quedar como patrimonio futuro del orden boliviano. Por ejemplo, la conciencia de alcanzar un equilibrio, rayano en el mito, entre gastos e ingresos fiscales. El descubrimiento de los costos como fundamental variable de un Estado social. Pero no sólo en lo económico se puede citar algo heredable. También en lo social la antítesis neoliberal nos deja beneficios, pues muchas de las medidas del neoliberalismo criollo han contribuido positivamente a clarificar las siluetas de los distintos actores sociales: sindicatos que deben prevalecer sin el remanso del Estado, sectores industriales intensivos en capital que ya no deben ser apéndices del Estado para ser tales. El neoliberalismo, por efectos de ajuste técnico de la maquinaria estatal, trae una presión histórica, si bien sólo potencial, de un aparato gubernamental no sólo libre de ser conejillo de indias para afanes de “co-gestión obrera” sino que quiere dejar de ser punto cíclico que cobija el patrimonialismo de los gobernantes en turno. Con el neoliberalismo, para concluir, ha ganado atención una demanda y conciencia social por la regulación del mercado.³⁷

4. LOS CAPITALES SUPERESTRUCTURALES DEL DESARROLLO

En párrafos anteriores habíamos iniciado esta parte de la discusión relativa a averiguar a quién se le debía atribuir qué “males” sociales, sosteniendo que existen por lo menos otras fuentes tan o más importantes para explicar la pobreza, el subdesarrollo y la

³⁷ El repliegue del Estado de su intervención productiva directa ha ido acompañado de la instalación de un gran aparato de entidades de regulación sectorial en Bolivia. Así es como, concomitantemente con la Ley de Capitalización, se creó el Sistema de Regulación Sectorial (Sirese) mediante la ley 1600.

exclusión social que la exclusiva regresión de los problemas al factor del mercado. Ahora, a lo ya dicho añádase que entre esas otras fuentes está también todo lo que se puede agrupar bajo la rúbrica de los capitales superestructurales del desarrollo.

Son muchas las formas en las cuales se expresa esta variante de recursos. Pero el análisis se detendrá por un momento en sólo algunas de ellas. Por un lado veamos lo que podría denominarse el *capital idiosincrático* o, más exactamente, capital idiocrático (“gobierno de lo propio”) de una sociedad.³⁸ Para empezar digamos en este contexto, que hasta hace poco hemos vivido en Bolivia una fase saludable de revalorización de nuestra culturas originarias.³⁹ Ha habido ciertamente versiones culturalistas más extremas que otras, como aquellas que proponían un salto de la “plenitud incásica pre-

³⁸ Aunque usado por él para el término capital social, si seguimos el método de James Coleman (“Social capital in the creation of Human Capital”, *American Journal of Sociology*, 1988, suplemento, vol. 94, pp. 95-120), podemos decir que desde el punto de vista del concepto de capital idiosincrático o idiocrático, en una comunidad no interesa ya qué normas estimulen, por ejemplo, el mérito en el rendimiento escolar —aquí Coleman pone el acento en la norma y las concomitantes sanciones como forma de capital social— sino en algo más delicado: cómo es que la comunidad ha convenido en valorar como digno de normarse el que se premie el mejor rendimiento; qué procesos, qué mecanismos hacen entonces que la sociedad constituya no ya la norma, sino defina un determinado estilo de hábito como algo digno de que proteja una norma. Veamos más de cerca: una agrupación criminal puede estar dotada de capital físico; incluso gozar de capital humano si su actividad delincuente es sofisticada e implica aptitudes que se aprenden y además se mueve en un contexto de fuerte confianza, o sea, capital social. Pero si sus actividades a pesar de eso se articulan con negligencia, impuntualidad, improvisación —por mucho que eso se limite por la tecnología intrínseca en el capital físico y humano— los rendimientos son menores relativamente y pueden además degradar a mediano plazo las otras formas de capital. Para volver a nuestro tema central: una cosa es un intelectual “prueba” de capital humano (“bien preparado académicamente”) y otra muy distinta —como veremos— que su *modo* de reflexionar, a pesar de ello, sea crecientemente no riguroso, acrítico o no innovativo. Si el capital físico implica pues cambios en la materia para hacer instrumentos; el social, cambios en las relaciones entre las personas; o el humano, cambios en la fuerza de trabajo por la vía, por ejemplo, de la capacitación; el capital idiocrático, también con efectos de productividad medibles, implica cambios en estilos de hábito social (reacciones ante escenarios sociales que a fuerza de generalizaciones y prejuicios, son virtualmente automáticas) que revertidos apoyan, a su modo, la productividad.

³⁹ En torno al tema étnico véase la síntesis completa de Xavier Albó, *Quechuas y aymaras*, PNUD/Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, La Paz, 1998. Del mismo autor una recapitulación más histórica: “Bolivia: Making the leap from local mobilization to national politics”, *Nacla: Report on the Americas*, marzo-abril, 1996, vol. 29, núm. 5, Nueva York, pp. 15-20. También el análisis más político con relación al tema indígena del mismo Xavier Albó, “And from Kataristas to MNRistas? The surprising and bold alliance between Aymaras and Neoliberals in Bolivia”, en Donna Lee Van Cott (comp.), *Indigenous peoples and democracy in Latin America*, St. Martin’s Press, Nueva York, 1994, pp. 55-81. Para una visión global de la historia boliviana con permanentes referencias al tema indígena, véase de Herbert Klein, *Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society*, Oxford University Press, Nueva York, 1992. Para el periodo colonial, por ejemplo Franklin Pease, “Crisis y transformaciones de la sociedad andina”, *Cuadernos de Historia*, diciembre, núm. 15, Santiago, 1995, pp. 99-121. Para el periodo republicano, en especial hasta 1952, véase Tristan Platt, *Estado boliviano y Ayllu andino*, IEP, Lima, 1982. Para el periodo precolonial incaico: John Murra, “On Inca Political Structure”, en Ronald Cohen y John Middleton (comps.), *Comparative Political Systems. Studies in the Politics of Preindustrial Societies*. The Natural History Press, Nueva York, 1967, pp. 339-353. Para una aproximación comparativa en este periodo: Friedrich Katz, “Einige Aspekte der Entwicklung Cuzcos und Tenochtitlans im Vergleich”, en Friedrich Edelmayr (comp.), *Die beiden Amerikas—Die neue Welt unter kolonialer Herrschaft*, Brandes & Apset, Frankfurt a.M., 1996, pp. 35-44. Para una visión crítica a método y conclusiones de ciertos estudios en antropología y etnohistoria andina, véase Nathan Wachtel, “Nota sobre el problema de las identidades colectivas en los Andes meridionales”, en Rafael Varón y Javier Flores, (comps.), *Arqueología, antropología e historia*

hispanica” a la “evanescencia de la sociedad informatizada” considerando el puente intermedio de la clásica industrialización como un rescoldo antiecológico, culturalmente occidentalizante y socialmente depredador.⁴⁰ Para qué mencionar que, hasta hace poco, era víctima de la mayor sanción moral quien osaba decir que los vínculos de “reciprocidad andina” en el ancestral mundo comunitario rural eran una de las más grandes trabas hacia conductas de acumulación productivista en ciertas partes del agro.⁴¹ Evidentemente, el flujo progresista que vino con el rescate de lo cultural pro-

en los Andes. Homenaje a María Rostworowski, Instituto de Estudios Peruanos/Banco Central de Reserva del Perú, Lima, 1997, pp. 667-690. Un análisis de las relaciones estatales para los Andes septentrionales en el periodo incaico en Frank Salomon, “Systèmes Politiques Verticaux aux Marches de l’Empire Inca”, *Annales ESC*, septiembre-diciembre, 1978, año 33, núm. 5/6, pp. 967-989. Para un texto del periodo preincaico por ejemplo: David Browman, “Tiawanaku: Development of Interzonal Trade and Economic Expansion in the Altiplano”, en David Browman (comp.), *Social and Economic Organization in the prehispanic Andes*, BAR International Series 194, Oxford, 1984, pp. 117-142.

⁴⁰ El autor representativo de esta propuesta en Bolivia es Javier Medina. Véase *Del alivio a la pobreza al desarrollo humano*, Hisbol, La Paz, 1994. Del mismo autor, *Repensar Bolivia*, Hisbol, La Paz, 1992. Con todo, la crítica de Medina —cuya extravagancia es en este caso benéfica— en la pretensión inviable de ver para Bolivia como solución una conexión directa entre el “etnodesarrollo” andinista y la época “postindustrial” (*op. cit.*, pp. 105 y 154) desnudó mucho del libre albedrío categorial de los intelectuales hegemónicos y fustigó como pocos la importación poco compadecida de la realidad de conceptos centrales para forzarlos en un lugar al parecer cognoscible por otras vías ya que carente de prerrequisitos sociohistóricos indispensables para un análisis de la modernización clásica: prerrequisitos como mercado interno, homogeneidad e incluso continuidad territorial o finalmente, mínima industrialización.

⁴¹ Es discutible que se crea como Medina (*cf. Del alivio... op. cit.*, pp. 184 ss.) que relaciones de asimetría en la formación incaica se hubieran dado entre Imperio y subunidades étnicas del mismo, pero no dentro de las mismas subunidades, como fueron por ejemplo los reinos aymaras. Una asimetría de reciprocidad —que por cierto no contiene además los efectos de reproducción estratégica de una acumulación productiva— es advertida por otros autores también dentro de las unidades subnacionales étnicas, cosa que a veces se pretende negar para mostrar un mito igualitario nuclear. Para el tema de la asimetría intra-aymara véase por ejemplo de John Murra, “Un reino aymara en 1567”, en *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1975, pp. 193-223. Ahí también: “Las autoridades étnicas tradicionales en el Alto Huallaga”, pp. 171-191. De él más recientemente: “¿Existieron el tributo y los mercados en los Andes antes de la invasión europea?”, en Rafael Varón y Javier Flores, *op. cit.*, pp. 737-747. También Henry Pease, “Interacción y crisis en los Andes: señoríos indígenas y régimen colonial”, en Manuel Gutiérrez (comp.), *De palabra y obra en el nuevo mundo. 2. Encuentros interétnicos*, Siglo XXI, Madrid, 1992, pp. 385-402. Un análisis de la lucha en el periodo pretoledano y postpizarrista de los caciques étnicos se tiene en Carlos Sempat, “Los señores étnicos y los corregidores de indios en la conformación del Estado colonial”, *Anuario de Estudios Americanos*, vol. XLIV, Sevilla, 1987, pp. 325-426. Para un análisis de procesos de opresión además cultural entre etnias upuestas —según algunos— incapaces de algo semejante dada su filiación “andina”, véase por supuesto el ensayo de Nathan Wachtel, “Hommes d’eau: le problème uru (XVI-XVII siècle)”, *Annales ESC*, núm. 5/6, *op. cit.*, pp. 1127-1159. Para un análisis de los señores étnicos específicamente “regionales”, véase María Rostworowsky, “La estratificación social y el hatun curaca en el mundo andino”, *Histórica*, diciembre, vol. 1, núm. 2, Lima, 1977, pp. 249-286. Por cierto que la cuestión que Klein llamó “ritual impoverization system” (*op. cit.*, p. 46) es sólo uno de los elementos que pueden arrojar luces sobre una de las causas de un desempeño estacionario de las fuerzas productivas en los Andes precolombinos. Otro llamativo aspecto que haría a un estacionario desempeño de la tecnificación de la administración pública es que el sistema de cargos públicos en el caso clásico andino postcolonial según Albó (véase *Quechuas y aymaras... op. cit.*, pp. 25 y 46) haya comportado un significado a “carga”, sobre la base de la rotación de los miembros de la comunidad en los cargos estatales étnicos, y donde el tema de la aptitud al parecer tendía a jugar un rol secundario amén de que este sistema rotatorio no estaba totalmente desvinculado del sistema de empobrecimiento ritual señalado. Desde una óptica de

pio, no sólo representó el bienvenido inicio de un desmantelar sabio de formas de convivencia previa, sojuzgadoras de otras culturas y visiones, sino la conciencia de que Bolivia no puede conformarse sin abrirse a esa innata heterogeneidad étnica. Pero como suele suceder en la cúspide de un afán reivindicacionista, este flujo no parece haber estado lejos de contribuir, simultáneamente, a la pérdida creciente y casi total de un espíritu radicalmente crítico frente a aquello que no por ser culturalmente propio —en lo urbano o lo rural, en la conducta de las clases pudientes o en las otras— puede no influir de manera negativa y estructural incluso en el rendimiento externo de nuestra economía que es en realidad uno de los puntos que más preocupa. Esta actitud poco crítica no nace con el progresista flujo culturalista de los últimos años, pero parece consolidarse bajo su manto.⁴²

En efecto, un análisis somero de disposiciones espirituales “automáticas” y culturales de la sociedad (o sea de los estilos de hábito micro y macrosocial, del actor individual o de las entidades), como ya lo anotó para el tema de la *disciplina* Alfred Marshall,⁴³ arroja luces sobre un racimo de causas de compleja manifestación en el desempeño económico. Pero un culturalismo acrítico bloquea toda posibilidad de ver esta variable. Superándolo se descubrirá que la planificación como práctica del operador estatal no sólo se enfrenta a la “lógica del mercado”, sino que es tanto más inocua cuanto mayor sea la institucionalización de la *improvisación* como constante social en estilo de

las estructuras históricas no deja de ser interesante anotar en este contexto que un sistema de rotación para los cargos estatales sí funcionó, buscando paralelamente la idoneidad al cargo, pues fue combiándose, como en el caso de la polis griega clásica ateniense, con severos sistemas de contraloría institucionalizada, pero en especial, de filtración censal de los candidatos según aptitud y con cierto grado de extensión del uso de salarios para los que ejercían, por rotación también, esos cargos con base además en una territorialización marcada de los puestos a asignarse. Véase sobre esto último de Georg Busolt, *Griechische Staatskunde*. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1963, pp. 315 y 470.

⁴² Hugo Mansilla es junto a Medina —y por tanto, ambos difícilmente enrolables en la escuela hegemónica, aunque diametralmente opuestos entre ellos mismos— un adicional caso aislado de análisis aun crítico en Bolivia, si bien sobre la base de un antimarxismo deleznable por apasionado. En Bolivia, Mansilla ha abordado con crítica saludable el tema de la relación entre valores culturales propios, relativismo cultural y preceptos universales. Véase de él entre otros: “La controversia entre universalismo y particularismo en la filosofía de la cultura”, *Revista Latinoamericana de Filosofía*, primavera, 1998, vol. XXIV, núm. 2, pp. 217-235 y 229; “La necesidad de enfoques críticos ante los problemas del desarrollo y del medio ambiente y los excesos del postmodernismo”, *Revista Paraguaya de Sociología*, mayo-agosto, 1997, año 34, núm. 99, pp. 63-78; “Principios universales y valores particularistas. El racionalismo occidental y las identidades sociales premodernas”, *Revista Paraguaya de Sociología*, enero-abril, 1994, año 31, núm. 89, pp. 76-77 y 205-224. También el análisis más político, “Perspectivas para el movimiento socialista en América Latina”, *Nueva Sociedad*, 1990, núm. 108, Caracas, pp. 132-146.

⁴³ Véase Alfred Marshall, *Industry and Trade: A Study of Industrial Technique and Business Organization, and Their Influences on the Conditions of Various Classes and Nations*, Macmillan and Co., Londres, 1921. Marshall introduce exploratoriamente en esta obra tardía categorías como la “habilidad hacia un orden constructivo” en la idiosincrasia de ciertos estratos económicos en el surgimiento industrial inglés (p. 47); especula sobre el perjuicio que pudo implicar la purga de los sarracenos en España para su desarrollo manufacturero (p. 107), destaca el individualismo estético en el francés del siglo XVIII como factor en la industrial textil (p. 114) o la “disciplina estricta” en el alemán como rasgo del desarrollo retrasado de la economía alemana (p. 128). Una tematización sobre esto en Corine L'Harmet. “L'étude des nations chez Alfred Marshall: Les éléments d'un système évolutionnaire”. *Revue d'Economie Régionale et Urbaine*, 1998, núm. 1, pp. 3-22, Burdeos.

trabajo de las burocracias del aparato estatal. Por otro lado, si los agentes sociales actúan sin parámetros de *disciplina* en ámbitos que como la fábrica, un ministerio, una entidad pública de educación o la misma producción científica —por los algoritmos eficientes y efectivos que implican— ciertas operaciones sociales no congenian fácilmente con estilos arbitrarios y no normalizados de vida profesional. Pero lo mismo puede decirse de una frágil inclinación del espíritu social al cultivo de la *precisión* como criterio rector que debiera sobrentenderse en la ejecución de tareas sociales, incluso tan intrascendentes en apariencia como el estilo de trabajo de un escolar. Pero ciertos rasgos idiosincráticos, ya cuajados en el *modus vivendi* de la sociedad, además han afectado variables más sensibles para el cambio cualitativo. Así se puede ver cómo muchos procesos de creciente daño ecológico son simplemente aceptados por un ciudadano preso de una consolidada *inercia* e indiferencia que es a esta altura por tanto ya medible en sus efectos (una suerte de sociedad donde la negligencia se ha petrificado como un hábito más en la estructura de la conducta social). Lo propio se puede decir de una creciente animadversión no sólo por la *excelencia* sino por *premiarla* si se diera (en los productos de la gestión pública, de la empresa o de las personas civiles). Lo último conlleva una represión generalizada y natural sobre la *creatividad* (que se da cuando la sociedad, por ejemplo, cultiva el arte de encontrar respuestas a preguntas que no existen) y elimina la imprescindible necesidad de que en los actores sociales se genere una permanente *insatisfacción* —aunque sea por mero ejercicio metodológico— con las soluciones halladas en los diversos campos de acción laboral, profesional, científica o gubernamental. Un análisis detallado en Bolivia mostraría cómo valores que impulsarían lo idiosincrático en sentido beneficioso, intangibles, pero efectivos y difuminados en gran parte de las entidades sociales cruciales, son precarios o inexistentes y hasta ahora insospechadas consecuencias para fenómenos que parecen tan inmunes a ellos como la balanza comercial del país o su viabilidad estrictamente ecológica.

La investigación sobre la influencia de factores culturales sobre la economía, o más generalmente, sobre la relación virtuosa de determinadas predisposiciones superestructurales sociales para con el desarrollo económico es, por supuesto, relativamente vieja aunque siempre actual.⁴⁴ Pero dentro del más amplio concepto de capitales superestructurales, en los últimos años por ejemplo, se ha debatido con mucha intensidad el rol de las instituciones como catalizadoras o como opresoras de un comportamiento productivista de las sociedades.⁴⁵ La explicación tentativa del atraso lati-

⁴¹ Trabajo clásico aún, Max Weber, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, Beltz, Weinheim, 1996.

⁴⁵ Entre otros trabajos suyos, véase Douglass North, 1993, "Economic Performance: Through Time", en Torsten Persson, *Nobel Lectures in Economic Sciences (1991-1995)*. World Scientific Publishing Co, Singapur, 1997, pp. 57-64. Una visión crítica sobre la obra de North en Bo Gustafsson, "Some theoretical problems of institutional economic history". *Scandinavian Economic History Review*, 1998, vol. XLVI, núm. 2, pp. 5-31. Para una autoubicación del mismo North frente al materialismo histórico, y donde en ese intento cree encontrar una reificación de las relaciones de producción en los costos de transacción, véase "Is it worth making sense of Marx?". *Inquiry*, 1986, vol. 29, pp. 57-64. También sobre el punto Oliver Williamson, "The institutions of governance", *The American Economic Review*, mayo, 1998, vol.

noamericano a partir de su malograda configuración institucional fomentadora del centralismo y el rentismo,⁴⁶ del poco apego a la innovación, puede arrojar muchas luces. Si esta corriente de investigación define a las instituciones como las reglas del juego en una sociedad o las cortapisas humanamente diseñadas para configurar la interacción humana, y si éstas, dada su composición, pueden ser inductoras inevitables del atraso, es tiempo de cuestionar ese juego de reglas y empujar a que la interacción social en la comunidad boliviana de una vez deje el limbo de la terciarización económica y la incapacidad creativa macrosocial. Así pues, la debilidad de *capital institucional* es otro de los factores superestructurales también explicativos del atraso. Pero debe distinguirse entre: a) instituciones fuertes; b) capital institucional, y c) *acumulación* de capital institucional. Esta diferenciación va contra la trivialización que en Bolivia comienza a sufrir el análisis mencionado en manos de la intelectualidad hegemónica que analizamos.⁴⁷ Al apuntar a las reglas de juego sociales estables del neoliberalismo, por ejemplo, podemos estar señalando instituciones fuertes, con los consecuentes beneficios derivables del solo hecho de una cierta previsibilidad en las reglas de cualquier juego. Pero no hay ni capital institucional ni menos acumulación de él, si por esto se entiende la creación de institucionalidades *perspicaces* y por aquello, la existencia de una determinada masa crítica de racionalidad y certidumbre institucional. Una acumulación de capital institucional como generación de instituciones perspicaces sería por ejemplo revertir la posición de una economía *sometida* al mercado. Como desde 1985, en Bolivia este tema es tabú, debe inferirse que no ha habido *acumulación de capital institucional* —aun en un marco de instituciones fuertes— pues eso, entre otras cosas, implicaría probablemente entender que si en los últimos 15 años no hubo crecimiento suficiente —menos desarrollo— y de las variables posibles todas se han venido moviendo menos el armazón institucional neoliberal, entonces la pregunta que en algún momento deberá ponerse sobre la mesa dirá: ¿cuál sería el paquete institucional que promueva y no ofusque el crecimiento económico? Pero esto focaliza justamente el tabú. Esto que parece retórico o abstracto, no lo es. Sólo el hecho de introducir en Bolivia un criterio de competitividad legislativa interterritorial —dando a los cuerpos territoriales regionales emergentes de una real descentralización márgenes de innovación legislativa económica y social— abriría una fuente de acumulación de capital institucional de medibles consecuencias. En resumen: una de las preocupaciones centrales es indagar, más bien, cuál tipo de cooperación social es productivista y, por tanto, dismantelar aquellos marcos institucionales —incluso el derivado de la dupla “democracia/economía de mercado” — que inducen al estancamiento económico. No es por tanto sólo un problema de “tener instituciones fuertes” sino de tener institucio-

88, núm. 2, pp. 75-79. Asimismo, Avner Greif, “Théorie des jeux et analyse historique des institutions: Les institutions économiques du Moyen Age”, *Annales ESC*, mayo-junio, 1998, año 53, núm. 3, pp. 597-633.

⁴⁶ Véase por ejemplo D. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Nueva York, 1990, p. 101.

⁴⁷ Véase por ejemplo Henry Oporto, *Reinventando el gobierno*, Ildis, Amigos del Libro, La Paz, pp. 40 ss.

nes “perspicaces” desde un punto de ruptura histórica. Si incorporamos la “perspicacia institucional” al marco del concepto de *capital institucional*, es también más entendible la relación posible y necesaria con el llamado *capital humano*. Si no, sucede que se puede llegar a plantear para Bolivia un sistema de educación dual —con la famosa bifurcación del bachillerato en educación de oficios y en otra pensada para su continuación universitaria—, pero finalmente estéril, pues en las actuales condiciones se haría en un ámbito de gradual desindustrialización, esterilizando ciertos de los beneficios potencialmente esperados.⁴⁸

Ahora bien, la consolidación de un “parque de capital institucional de masa crítica”, a su turno, depende también mucho de que el capital idiosincrático alcance formas que lo sustenten. El punto delicado es cómo no herir una vocación de total apertura a la diversidad social y étnica a tiempo de despertar una nueva “ética del trabajo” que pudiera no ser, precisamente, el mejor atributo de más de una costumbre popular o de aquellas que cultivan las élites bolivianas, o más aún, de las practicadas por las culturas originarias.

En similar línea de análisis de las variables superestructurales como parcialmente explicativas de rasgos peculiares del desarrollo incluso tecnológico, se mueve la investigación más reciente, que maneja la hipótesis de que el llamado *capital social* de una sociedad,⁴⁹ es decir, la habilidad de la gente para trabajar conjuntamente en grupos por objetivos comunes sobre la base de algún grado de confianza proveniente de compartir valores comunes, tiene una determinada forma de influir en la economía. Lo interesante aquí es el intento de establecer una correlación entre, por un lado, sociedades de alta “confianza espontánea” y, por el otro, su capacidad de gestión empresarial de punta y la obtención de complejos industriales de gran escala y marca mundial. Por el contrario, sociedades cuya sociabilidad y confianza se basan más bien en lazos parentales o familísticos —no espontáneos—, habrían enfrentado históricamente grandes tropiezos de tipo económico-industrial, empezando por el proporcional incremento que la carencia de confianza social genera a nivel de los llamados costos de transacción.

En pocas palabras, los ejemplos de la temática institucional y del capital social son una nueva muestra clara de la vieja correlación entre rasgos superestructurales de una sociedad y la *performance* económica de la misma. Así pues, parece cada vez más difícil no ir estableciendo relaciones entre formas idiosincráticas de vida típicamente nacionales —que infectan para bien o para mal el estilo reflexivo de los intelectuales— y

⁴⁸ Lo mismo analiza Coleman para el caso de la potencial pérdida de valor del capital humano si no es complementado con capital social. Véase *op. cit.*, p. 111.

⁴⁹ Véase por supuesto el ya citado trabajo de James Coleman “Social Capital...” Para un buen resumen crítico de la evolución del concepto, véase Michael Woolcock, “Social Capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework”, *Theory and Society*, abril, 1998, vol. 27, núm. 2, pp. 151-208. Para una aplicación véase de Francis Fukuyama, *Trust*, Penguin Economics, Londres, 1995. Otro análisis aplicado: Robert Gregory, “Social Capital Theorie and Administrative Reform: Maintaining Ethical Probity in Public service”, *Public Administration Review*, enero-febrero, 1999, vol. 59, núm. 1, pp. 63-75.

perspectivas económicas. En síntesis: los males de atraso y pobreza no habían tenido como fuentes sólo el mercado, sino el capital. Pero no sólo éste, sino también fuertes hábitos triviales de la gente que, condensados luego en sus ámbitos de acción profesionales o de liderazgo, pueden ser oculta pero excepcionalmente efectivos en su juego, alcanzando a afectar incluso los negocios que se transan en una sociedad. Y en este contexto hay un signo de la experiencia de la civilización: lo que también parece ser lógico es que muchos elementos espirituales tengan potencialmente, en un Estado competente —puede ser grande o pequeño mientras sea eficiente y efectivo— y su capacidad de influir; una posibilidad real de ser reconducidos.

5. VARIABLE CRUCIAL DE LOS CAPITALES ESPIRITUALES: LAS ÉLITES INTELECTUALES DE CIENTÍFICOS SOCIALES

La fase neoliberal boliviana se desarrolla en medio de un estilo de interpretación y análisis especializado de la realidad, causa y efecto de un conformismo radical en los sectores pensantes⁵⁰ y en los que tienen acceso a los medios de comunicación y al gobierno público. En efecto, científicos sociales, “comunicadores sociales”⁵¹ y burocracia estatal —con las naturales y no pocas excepciones del caso— han contribuido enormemente al establecimiento de una época tendencialmente acrítica de pensamiento, deficiencia crucial de las élites intelectuales de las ciencias sociales en Bolivia. Cabe hacer descansar gran parte de esta crisis intelectual justamente en los llamados intelectuales académicos.⁵² Una sociedad sin nuevas ideas —como se puede empezar a inferir, sin una idiosincrasia por ejemplo productivista— paga a largo plazo un alto costo económico e histórico. Por lo tanto, el conformismo en la cual ha caído la actividad de la ciencia social en Bolivia no es ya sólo un tema de debate que se deba circunscribir al dato estrictamente academicista, sino a la relación de ello y las perspectivas de una sociedad de predecir con cierto margen de certeza y rigor su futuro y,

⁵⁰ Al hablar de “sectores pensantes” hacemos referencia al segmento hegemónico de intelectuales sociales motivo de nuestro foco de análisis. Pero es bueno aclarar que la generación de reflexión en el campo de las ciencias sociales en Bolivia por lógica no se restringe a este círculo, y mucho menos —por suerte— al estilo de análisis de los mismos, como ya hemos visto.

⁵¹ Una creciente importancia en el debate han logrado las relativamente nuevas generaciones de periodistas bolivianos con grado universitario. Junto a la sociología retórica y la politología “zodiacal” que puebla el grueso del sector hegemónico pensante, algunos “comunicadores sociales” son ahora consustanciales al fenómeno.

⁵² Si se conviene en que una sociedad debe poder explotar al máximo la especialización de sus entidades, la crisis es contrastante, pues no puede ser normal que, como anotáramos, sean actores no precisamente especializados en el análisis social como profesión, los que se conviertan en mejores fuentes de propuestas de ruptura macroestatal. Esto que en un instante parece anecdótico es más bien signo de una subutilización de la especialización social. Si bien medidas como la LPP o la capitalización tuvieron entre sus operadores y diseñadores a técnicos e intelectuales, éstos no provenían de los intelectuales hegemónicos y —globalmente hablando— las medidas fueron más bien fruto de una innovación que se acumuló contingentemente y no aplicación de un modelo científico.

en conformidad, adaptar sus procesos institucionales y facilitar mediatamente, entre otras cosas, su competitividad económica internacional.

Intelectuales sin cuya presencia, por cierto, la de por sí restringida actividad intelectual boliviana sería mucho menos dinámica, han pasado a engrosar las filas de una intelectualidad de consultoría, autorreferida —“incestuosa” en sus citas bibliográficas—, cohesionadora del modelo e influyente.⁵³ Su poder de difusión se explica en parte por cierta prensa especializada, poco exigente y que fomenta en esta élite pensante su estilo melifluido de análisis.⁵⁴ Las ideas fuerza que esta élite maneja son las siguientes: *i*) hay una tendencia ineluctable pero a la vez saludable hacia un eclecticismo ideológico; *ii*) se califica el uso de términos como “neoliberalismo” como algo fruto del “apasionamiento”; *iii*) no hay ya necesidad de la vieja topología que hablaba de izquierdas y derechas; *iv*) debe fomentarse la correlación directa y “positiva” entre “cientificidad” e independentismo partidario; *v*) propala un trato despectivo de la “clase política”; *vi*) practica un apego irreflexivo a los paradigmas de moda de la globalización, las ventajas comparativas dinámicas, la versión sofista de la sustentabilidad, la explicación demografista de la pobreza, la idealización de la culturalidad y la “democracia pactada”; *vii*) proclama el continuismo propositivo o programático entre gobiernos, como una absoluta virtud en “aras de la estabilidad y el consenso”.

Para terminar pues, vayamos viendo una a una estas proposiciones. Por un lado, luego de varios años de posiciones diferenciadas, a veces antagónicas,⁵⁵ encontramos grandes consensos sobre un paquete de acuerdos sobre el proyecto de sociedad que todos debiéramos buscar. Todos los actores políticos, por ejemplo, que antes se miraban tras las cercas que cada uno alzaba para el enfrentamiento por lo general mutuamente destructivo, se irían reconociendo en un mismo “salón”, de ubicación central, en un ámbito de la mayor modernidad imaginable, pues los otrora rivales o enemigos han descubierto que no hay más razones de separación. Esto —que en realidad es un eclecticismo conformista— sería fruto además de un sacrificado proceso de aprendi-

⁵³ Autores como Calderón o Toranzo —por nombrar a sólo dos de los más destacados representantes— son responsables de sendos aportes por lo menos para haber tenido en el periodo neoliberal procesos continuos de reflexión del todo. Y no se puede olvidar que su labor fue positiva en la medida en que su función de vehículos doctrinales de la época neoliberal no excluyó una línea humanista, plural y tolerante del análisis que, por suerte en esas virtudes, no requiere de rigor científico para ser viable.

⁵⁴ En muchos casos, las nuevas generaciones de periodistas politólogos han adoptado el mismo estilo de análisis, con lo que se produce una mutua inseminación de idénticos códigos de análisis. Es indicativo que las innumerables oficinas de “relaciones públicas” de las reparticiones públicas fueran ocasionalmente asumidas por estos “comunicadores sociales”, con lo que es más explicable la labor de defensa del sistema. Alguna prensa especializada coadyuvó así a la construcción hegemónica del discurso de los intelectuales. Toranzo es —a propósito— miembro de una alta instancia editorial de *La Razón*, uno de los más importantes periódicos de circulación nacional, columnista del mismo y editor de *Tiempo Político*, uno de los suplementos más activos de propagación del análisis hegemónico e importante foro de reflexión.

⁵⁵ Como ejemplos del antagonismo se suele mencionar el que hubo entre “burguesía” y “proletariado” o entre militares y sindicatos de obreros mineros, o aquel entre quienes abogaban por una “sanción moral y penal a las dictaduras” y quienes glorificaban la “conversión de un ex dictador en demócrata”.

zaje de los actores. El imán conceptual alrededor del cual se arma este eclecticismo suele ser el par “democracia representativa” y “economía de mercado” que, como desenlace de la trifulca ideológico-política de la época que vivimos, se revelara como resultado final de la simplificación de los posicionamientos imponiendo una poderosa convergencia de conceptos y prácticas, sinónimo de convivencia pacífica y “maduración racional” de las sociedades. Para Bolivia, se habla de una reciprocidad entre el modelo de “economía abierta” instaurado desde 1985 y recuperación democrática desde 1982.⁵⁶ Además se argumenta esta posición con la aparente corroboración mundial de que a nivel de las naciones más desarrolladas también habría esta relación virtuosa entre “economía de mercado” y “democracia liberal”. (Obviamente esta última suposición es también difícilmente sostenible. Por una parte se han dado casos donde sendos programas neoliberales son aplicados en marcos dictatoriales. Por el contrario, democracias altamente desarrolladas en su sentido más liberal son más bien fomentadoras de un intervencionismo estatal notorio.)

En este punto, la élite de científicos sociales⁵⁷ en realidad nos quiere convencer de un esquema equívoco por varios lados. Primero porque los términos usados deben ser reprecisados en sus contenidos y su naturaleza. Así establecen una relación automática entre una “democracia” en realidad subutilizada incluso en el marco de sus cánones liberales y una *forma de manifestación* del capitalismo, el neoliberalismo. En segundo lugar, la vinculación entre ambos lados de la ecuación no es fatalmente la única. Sobre esta base, empero, el segmento intelectual hegemónico criollo nos dice más o menos lo siguiente: toda discusión sobre el futuro de Bolivia se debe realizar sobre la premisa de aceptar, de una buena vez, la necesidad recíproca entre democracia formal y neoliberalismo. No habría ya tiempo, ni necesidad ni ciencia para especular sobre “modelos alternativos”. En otras palabras, buscan imponer una sociedad satisfecha de sus periódicas contiendas electorales y un mercado que hemos visto es imperfecto e incompleto, aunque a pesar de eso, siga desprovisto de suficientes y calculadas prótesis y cortapisas.

Cuando este principio se ha generalizado en los sectores progresistas, es lógico entender que los ánimos por crear identidades y diferenciaciones de acción política alternativa se resientan.⁵⁸ En efecto, el segundo rasgo discursivo de las élites es gene-

⁵⁶ Un miembro central del segmento hegemónico es René Mayorga. Es uno de los que más ha insistido en el par economía de mercado/democracia representativa como consenso social. Véase René Mayorga, “Presidencialismo parlamentarizado y procesos de decisión en Bolivia”, *Revista Paraguaya de Sociología*, septiembre-diciembre, 1997, año 34, núm. 100, pp. 114 ss. También impulsor esforzado de la idea de una despolarización en el sistema político en *Antipolítica y neopopulismo*, Cebem, La Paz, 1995, pp. 89 ss. Otro representante central del segmento hegemónico es el autor Jorge Lazarte. Véase por ejemplo, sobre el tema de la democracia, “El desafío de la democracia”, en Carlos Toranzo (comp.), *Desafíos para la izquierda*, Ildis, La Paz, 1991, pp. 65-72.

⁵⁷ Un autor que resume y ordena el trajín reflexivo en el sentido de este grupo es Henry Oporto, *op. cit.*, p. 32.

⁵⁸ Como se señaló, esto sucedió con la labor autojustificatoria del izquierdista del MBL Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Bolivia entre 1993 y 1997. Luego de las elecciones del 1997, el MBL con una votación menor al 4% se encuentra hoy prácticamente eliminado del escenario político.

rar una sensación de que uno es portador del más anacrónico ideologismo cuando trata de calificar la época como “neoliberal”. Tácitamente dan a entender que ante la dupla victoriosa de “economía de mercado”⁵⁹ y “democracia”, sus críticos no son capaces de ofrecer nada nuevo que no sea la anticuada fórmula de un estatismo asfixiante y de otorgar una —por cierto discutible— prelación a la “democracia directa y popular” frente a la democracia liberal.⁶⁰ Cuando se alza el nombre del neoliberalismo, las élites pensantes —haciendo además gala de una supuesta independencia científica de criterio— advierten que la discusión no puede ir ya por los senderos del “debate con adjetivos”. Pero hemos visto que lo neoliberal no es un mero adjetivo, sino una forma compleja de actitudes sociales y diseños de políticas públicas; esto sin perjuicio de aceptar que en principio, la forma neoliberal no es mala ni buena en sí, sino un *modus operandi* socioestatal que bajo ciertas circunstancias puede o no ser útil. Sin duda que la oposición enguerrillada⁶¹ acusa al neoliberalismo de todo y de nada y lo que es peor, sin contraponerle una opción igual de práctica y operativa, ha ayudado a que sus defensores tengan facilitada la tarea de acusar de “apasionamiento” a quien usa el epíteto “neoliberal” en sus argumentaciones.

Estos dos pasos previos son la base del tercero. En efecto, una vez proclamada la convergencia con base en la dupla mercado/democracia y luego de haber caracterizado de demagogia ideologizante el uso de términos como “neoliberalismo”, se llega a la fundamental conclusión de que no hay izquierda ni, por tanto, derecha. Pues la mencionada convergencia sería un movimiento imparablemente convergente hacia un punto o un centro. Pero un centro que supondría una “promediación” y amalgamamiento de posiciones antes diversas, un punto que implica que los actores sociales han sacado el común denominador de las añejas posiciones y, fraternizados en el numerador, harían superfluas topologías “belicosas” como “derecha” o “izquierda”. En el fondo, un mundo cerrado incluso a mínimas condiciones de competitividad propositiva en el más sencillo espíritu liberal.

El mundo se habría modernizado al haber hecho superfluas visiones contrarias sobre la sociedad; ella misma se hubiera puesto de acuerdo sobre los valores inamovibles

⁵⁹ Pero, ¿es el mercado la condensación de lo económico? E incluso aceptando ese indemostrable esencialismo del mercado: ¿qué tipo de mercado es el que tiene Bolivia en la realidad? Y si supusiéramos que tiene uno ideal, ¿cuán posible realmente es uno de ese tipo incluso en el mundo desarrollado? Es obvio que estas dudas no son suficientemente dignas para que la visión hegemónica pierda el tiempo en ellas.

⁶⁰ Dentro del sistema de producción intelectual boliviano del periodo, hubo por supuesto una producción de crítica radical al modelo neoliberal desde un campo sin embargo generalmente caracterizado por la incapacidad de notar el rasgo progresivo de la época, reponiendo esquemas ortodoxos de análisis que no sólo automarginaron estas posiciones, sino que parecían dar razón al segmento hegemónico sobre la esterilidad de otros análisis que no sean los suyos. Un ejemplo representativo desde la crítica radical es el trabajo de Fabián Yaksic y Luis Tapia, *Bolivia, modernizaciones empobrecedoras*, Muela del Diablo Editores/Sosfaim, La Paz, 1997, pp. 125 ss.

⁶¹ Es patético como la LPP fue ferozmente atacada por la Central Obrera Boliviana como una de las “leyes malditas” del gobierno 1993-1997. No se diga ya nada sobre el atrincheramiento dogmático que se produjo desde la misma histórica central sindical frente a la Ley de Capitalización de las empresas pública.

de ese acuerdo. Bajo el peso de semejantes novedades ¿puede aún un partido autoentendido de izquierdista —y así visto por gran parte de la población— ejercer una diferenciación en una gestión de gobierno con los más disímiles socios?

La desaparición de izquierdas y derechas facilita de paso un creciente acomodamiento comercial del grupo hegemónico de analistas sociales que no en vano ha contribuido a una ideología del conformismo. Pues como lo piden las buenas costumbres, ya no habría que “venderse” a ningún bando pues éstos se han fusionado y ahora sí se podría ejercer ciencia a carta cabal. Los analistas se suben sobre la sociedad y desde allí arriba dan veredictos a los políticos, a los gobernantes y a las “organizaciones vivas”. Una actitud discutible, pues no deja de ser desde el cómodo lugar que nunca asume responsabilidades públicas valorando despectivamente a la “clase política” sin entender que así contribuyen a un peligroso sentimiento que sataniza la política misma y, a la vez, no se toman la molestia de recordar que si hay procesos de crisis de institucionalidad en la política se debe no pocas veces a que el elector legitima cíclicamente a los grupos políticos patrimonialistas consciente de su calidad.

Precisamente la interpretación en el fondo negativista de la política hecha por los intelectuales hegemónicos —coexistente claro en sus análisis con parabienes y alientos convencidos o rituales al sistema político— es atribuible en alguna medida a ellos. El “Pueblo” en realidad sería una víctima permanente de los desmanes de los partidos; los políticos serían el único riesgo real que en un momento dado pondría en peligro el consenso difícilmente logrado; la política es una esfera en constante lucha contra su descomposición que ellos a lo mucho pueden analizar desde arriba para no involucrarse.

Para darle un matiz “actualizado” a su conservadurismo, la élite manipula una gama de paradigmas de moda, como la “globalización”.⁶² Hay incluso textos donde se sostiene que la Ley de Participación Popular boliviana analizada al inicio, sería la forma en que nuestra sociedad habría respondido a la globalización, lo que no deja de ser una revelación realmente enigmática, pues la mencionada “globalización” no sólo puede no ser una novedad esencial sino que sus repetidores criollos no han demostrado hasta ahora sus verdaderas implicaciones para sociedades marginales como la boliviana. A lo que sí empujan es a que en el marco de la globalización famosa, saquen la conclusión ya vista de que las “ventajas comparativas dinámicas” —otro cliché clásico del clericalismo intelectual que aquí se critica— son la solución para una inserción boliviana provechosa al torbellino que remueve las relaciones internacionales en lo cultural, tecnológico y financiero. Como si no fuera suficiente con esto, en los últimos años se han dilapidado cantidades de recursos intelectuales⁶³ en una versión hartamente inadaptada de “desa-

⁶² Para un análisis extenso sobre los nuevos rasgos de la sociedad contemporánea en función de la informacionalización de la sociedad global, véase de Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Blackwell Publishers Inc., Oxford, 1999. Aquí en especial la parte conceptual del tomo I: “The rise of the Network Society” y el cierre en el tomo III: “End of Millenium”. Para el paradigma político de lo liberal-democrático, véase por ejemplo de Francis Fukuyama, *Have We Reached the End of History?*, The Rand Corporation, California, 1989. Para una propuesta de acción política con vistas a las transformaciones paradigmáticas en el mundo, cf. la conferencia magistral de Anthony Giddens, “The third way and its critics”, *Queen's Lecture 1999*, TUB, Berlín, 1999.

⁶³ Véase por ejemplo el ya citado Plan “El cambio para todos”.

rollo sostenible” incrementando papeleo y burocracias estatales en temas que, como éste, no es que no importen, pero nadie parece percatarse de que este tema debe ser precisado para Bolivia, debe ser desprovisto de todo su sesgo generalizante y retórico. Plantear ideas donde se persigue un bienintencionado control intergeneracional “sistémico” entre distintas variables de recursos sociales, cuando no se pueden resolver tareas más simples y sustanciales como acabar con la depredación forestal en el oriente amazónico boliviano o vincular los ramales oriental y occidental de los ferrocarriles bolivianos, suena a cruel diletantismo.

Las élites intelectuales también han obtenido un rédito al fomentar el rol de un análisis demografista de la pobreza, descuidando el análisis de los factores de poder, el papel de ciertas costumbres en la agudización de las formas precarias de vida e impidiendo el entendimiento del circuito entre cobertura de necesidades básicas y capacidad de generación de riqueza de la sociedad. La idealización de la culturalidad ha diluido en efecto la posibilidad de colocar sobre el tapete —como ya anticipamos líneas arriba— enfoques que clarifiquen qué segmentos de la conducta y la espiritualidad social promedio pueden jugar un papel conflictivo en términos de economía, competitividad y viabilidad social.

Los oligopolios pensantes⁶⁴ de la fase que atravesamos han vanagloriado en exceso las virtudes de la llamada “democracia pactada” insuflando una animosidad inédita para desmemorizar a la sociedad boliviana y probar su idea del centrismo ecléctico que se traduciría, justamente, en que ya no es pensable que algún actor político trace límites que lo resguarden de cierto grado inmanejable de pragmatismo. Finalmente, las élites pensantes no han dudado en hacer del “continuidismo” intergubernamental un mito exitoso. Es precisamente la temática de la continuidad la que ofrece un buen ejemplo de la crisis de “capital intelectual”. Usando una figura, como van las cosas, podría decirse que entre 1982 y el 2002 Bolivia habrá tenido una “tasa de acumulación” de capital intelectual —de connotaciones estatales— del “20%” si partimos de que sólo entre 1993 y 1997 —el periodo gubernamental de las grandes reformas— se tuvo valor agregado intelectual creativo de efectos macroestatales. Pero Bolivia es un país demasiado pobre como para contentarse con que el actual gobierno, o el que hubiera sido, no hubiese tenido nada más que “administrar” las reformas del anterior gobierno —no se mencione ya la posibilidad de ir revirtiéndolas. Ahora bien, es obvio que no se puede acumular sin “administrar” lo previamente alcanzado, pero si no se une eso a un proceso paralelo de adicional acumulación de capital intelectual, el país simplemente gira en su sitio. No puede ser que sólo cada 20 años se tengan ideas innovativas de envergadura estatal. Desde el 2002 habría que procurar una tasa de por lo menos un “75%” de acumulación, lo que significaría que tres de los cuatro gobier-

⁶⁴ La doctrina imperante en el análisis social boliviano tiene como principales agentes a los científicos propiamente dichos (que hemos citado), los funcionarios públicos cooptados por los gobiernos que independientemente de su procedencia han estilizado la doctrina estatal con la estadística y la supuesta frugalidad de análisis que enseña la práctica del poder. Finalmente, como apuntamos, ciertos “comunicadores sociales”.

nos desde ese año debieran acceder al poder con un mínimo paquete de innovaciones de política pública de efectos de ruptura.⁶⁵

Cerremos caracterizando algo mejor esto que no es más que el efecto de una profunda crisis de *capital intelectual*, es decir, de una agravada recesión en la generación de valor agregado intelectual. Esto es fruto de la preminencia de lo que se puede llamar ciencia social “blanda”. Simplemente veamos la lista de los elementos que caracterizan la “blandura” del estilo de trabajo intelectual boliviano que se ha vuelto dominante y agresivo en los últimos años en Bolivia como rasgo al parecer indesprendible de la fase que vivimos.⁶⁶ Las disciplinas “blandas” de análisis social son aquellas carac-

⁶⁵ La LPP es una reforma que anecdóticamente parece confirmar unas “ondas largas”, relativamente equidistantes en el tiempo, con que se producen las grandes reformas territoriales sobre el espacio que hoy es Bolivia. En efecto, medidas de recomposición administrativo-territorial de envergadura, se han dado “exactamente” cada 200 años. A finales del siglo XVI con las transformaciones integrales y reformas toledanas. Luego a finales del XVIII con la creación de las “intendencias” y el concomitante periodo de tecnificación administrativa gubernamental a nivel subnacional. Por último, a finales del XX, la LPP. Para el tema de la reforma de las intendencias a finales del XVIII, véase John Lynch, *Spanish Colonial Administration 1782-1810. The Intendant System in the Viceroyalty of the Rio de la Plata*. The Athlone Press, Londres, 1958. Más específicamente Edberto Óscar Acevedo, “El establecimiento de las Intendencias en el Alto Perú”, *Investigaciones y Ensayos*, enero-junio, 1979, núm. 26, Academia Nacional de Historia, Buenos Aires, pp. 213-258. Para un análisis de la conexión entre la reforma borbónica intendencial y el levantamiento de Tupac Amaru II, véase Scarlett O’Phelan, “El mito de la ‘independencia concedida’: los programas políticos del siglo XVIII y del temprano XIX en el Perú y Alto Perú (1730-1814)”, en Inge Buisson *et al.* (comps.), *Problemas de la formación del Estado y de la nación en Hispanoamérica*, Böhlau Verlag, Colonia, Lateinamerikanische Forschungen, 1984, tomo 13, pp. 55-92. Para dos visiones totalmente extremas y contrapuestas del fenómeno toledano en tanto reforma —incluida la temática territorial—, véase Ma. de la Paz González, “La acción educativa de España en Perú: El virrey Toledo y la promoción del indio (1569-1581)”, *Archivo Ibero-Americano*, enero-junio, 1996, año LVI, núm. 221-222, Madrid, pp. 191-277, y enfrente, Luis Valcárcel, “El virrey Toledo, gran tirano del Perú”, *Revista del Museo Nacional*, II semestre, 1940, tomo IX, núm. 2, Lima, pp. 153-174 y 277-309. Un análisis resumido de las “reducciones” toledanas en Alejandro Málaga, “Las reducciones en el Perú durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo”, *Anuario de Estudios Americanos*, 1974, vol. XXXI, Sevilla, pp. 819-842. Para un enfoque jurídico al tema de la organización territorial que abarca temporalmente las dos grandes olas de reformas administrativo-territoriales antes de la LPP, véase Alfonso García-Gallo, “La evolución de la organización territorial de las Indias de 1492-1824”, *Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano*, 1980, núm. 5, Quito, pp. 71-135. Finalmente, para los procesos de organización administrativo-territorial en el periodo precolonial o de transición, respectivamente, véase Craig Morris, “Establecimientos estatales en el Tawantinsuyu: una estrategia de urbanismo obligado”, *Revista del Museo Nacional*, 1973, vol. XXXIX, Lima, pp. 127-141; y Catherine de Julien, *Comdesuyo: The Political Division of Territory Under Inca and Spanish Rule*. Förderverein Amerikanistische Studien, BAS, núm. 19, Bonn, 1991. Es llamativo que no sólo se tenga este ciclo de 200 años sino que el péndulo empiece con reformas —las toledanas— incidentales más bien en el nivel territorial local, pase a las de finales del siglo XVIII —las de Carlos III— más centradas en el nivel intermedio o regional y vuelva, a finales del siglo XX —con la LPP— al nivel local. Es también singular que ni las reformas toledanas ni las de la LPP hayan puesto el acento en el fomento económico, algo que sí estuvo previsto en las reformas de nivel subnacional intendencial a finales del siglo XVIII. Sólo en esta comedia de “largas ondas pendulares” de reforma administrativo-territorial, podría encontrar consuelo la enconada e injustificada aversión del ex presidente boliviano Sánchez de Lozada a un nivel regional sólido entre lo local y el nivel central.

⁶⁶ Hay autores que, como hemos insinuado, sin haber caído en un radicalismo marginal anti-neoliberal, han logrado con diferente fuerza apartarse del estilo hegemónico. Estos autores han contribuido a que un mínimo de análisis riguroso y crítico no desaparezca del todo. Entre ellos recapitulemos nombres como Xavier Albó (problemática indígena y campesina), Roberto Laserna (pro-

terizadas, primero, por ser fácilmente susceptibles de ser replicadas por representantes de otras disciplinas o de tenerse la sensación de que las conclusiones alcanzadas son obtenibles sin mayor esfuerzo por quienes no son de la disciplina en cuestión. En segundo lugar, por hacer una virtud de su nula voluntad o capacidad de predecir con cierta solvencia rasgos del futuro. En tercer lugar por calificar continuamente ideas de moda al ser disciplinas fácilmente impresionables y que se dejan seducir cómodamente por categorías en boga luego toscamente apretadas a nuestra realidad sin adaptarlas. En cuarto lugar por promover interpretaciones clericales del mundo induciendo generalmente al conformismo. En quinto lugar por ser reacias a la crítica científica del estado de situación y más bien ponderar las virtudes de la quietud intelectual y de un concepto conservador de continuismo. En sexto lugar por clonar ideas de ideas perdiendo apego a los referentes históricos. En séptimo lugar por ejercitar sus especulaciones con una ínfima preocupación por el rigor científico. En octavo por desmerecer la búsqueda de ideas de quiebre y subestimar la búsqueda de innovación propositiva de calidad. En noveno lugar, por hipertrofiar los generalismos y lugares comunes impidiendo la toma de un estilo *vectorial* de razonamiento —concreto, medible, con dirección y apenas genérico. En décimo lugar, los operadores son un ejército relativamente sectario que de paso supone además que la “militancia política” inhibe la independencia de criterio sin darse cuenta de que más dependiente de criterio puede acabar siendo quien hace apología del sistema. Finalmente todo el proceso acaba siendo consustancial a alguna disciplina en sentido lato, como sucedió en Bolivia al principio con la sociología y con la politología después.

blemática de la economía de la coca), Hugo Mansilla (filosofía de la cultura), Javier Medina (desarrollo social “simbiótico”), Horst Grebe (economía política) y muchos más tanto en disciplinas más “duras”, como la historia, la etnohistoria o las mismas “ciencias de la comunicación”. Si bien más de uno de éstos puede coquetear con más de una categoría del grupo hegemónico o incluso ser partidario del modelo social imperante, esto no le ha impedido proteger un elemental sentido de neutralidad científica. Vemos pues que el dilema no es la ausencia total de crítica (fundamentalista o científica) al modelo, sino la incapacidad de que la crítica científica gane adherentes, se vuelva operativa y por tanto útil para la sociedad. El estilo promedio lo impone la élite intelectual a pesar de lugares de reflexión a su izquierda o derecha. Pero como ella misma ya no concibe derechas o izquierdas —en una “retórica maltrecha para un planeta de ambidextros” (Rubén Blades)— se autoconviene como expresión por excelencia de un nueva época sin muros ideológicos y hasta probablemente cree que la ciencia mora en ese reducto que proclama como una abrazo de fraternización finisecular.